

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

ARGENTINA

APOYO AL PROGRAMA DE REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA (AR-0124)

PROPUESTA DE PRÉSTAMO

Este documento fue preparado por el equipo de proyecto integrado por: Francisco Mejía (DPP/SCS); Rafael Millán (COF/CAR); Emilio Cueto (OPR/LEG); Dino Capriolo, Jefe de Equipo de Proyecto (RE1/OD2); y Pilar Yelicié, Secretarias (RE1/OD2).

ARGENTINA

APOYO AL PROGRAMA DE REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA

(AR-0124)

INDICE

Página

MAPA

DATOS SOCIOECONOMICOS

RESUMEN EJECUTIVO

I.	ANTECEDENTES	1
A.	Marco de Referencia	1
1.	La Justicia Federal y Provincial	1
2.	La Reforma Constitucional de 1994 y el Sistema Judicial Nacional	2
3.	Los principales problemas en el sistema de justicia nacional	3
4.	La estrategia para avanzar en el proceso de reforma judicial	9
B.	Participación y experiencia del Banco	10
1.	Participación del Banco	10
2.	Experiencia del Banco	11
C.	Participación y Experiencia de Otras Entidades	11
II.	EL PROGRAMA	12
A.	Objetivo	12
B.	Metas	12
C.	Descripción	12
1.	Protección jurídica	12
2.	Apoyo al diseño y ejecución de políticas preventivas del delito y de acceso a la justicia	14
3.	Justicia provincial y ordenamiento normativo	18
4.	Gastos de Ejecución	20
D.	Costo y Modalidades de Financiamiento	21
III.	EJECUCION DEL PROGRAMA	22
A.	El prestatario y el ejecutor	22
B.	Los Ejecutores	22
1.	El Ministerio de Justicia	22
2.	La Procuración del Tesoro de la Nación (PTN)	22
3.	El Ministerio Público Fiscal (MPF)	23
4.	El Ministerio Público de la Defensa (MPD)	23
5.	La Junta Federal de Cortes	23
C.	Estrategia de implementación	24
D.	Organización para la Ejecución	24

1.	Unidad Ejecutora Central (UEC)	24
2.	Unidades Ejecutoras Sectoriales (UES)	25
E.	Procedimientos Operativos	25
F.	Evaluación y Control	26
1.	Inspección y supervisión	26
2.	Auditoría y control	27
3.	Evaluación ex-post	27
G.	Adquisiciones	27
H.	Reconocimiento de gastos y financiamiento retroactivo	28
I.	Fondo Rotatorio	28
J.	Período de ejecución y cronograma de desembolsos	28
IV.	BENEFICIOS, RIESGOS Y VIABILIDAD DEL PROGRAMA	30
A.	Beneficios	30
1.	Beneficios del Programa en su conjunto	30
2.	Beneficios de los componentes	30
B.	Riesgos	32
1.	Riesgos del Programa en su conjunto	32
2.	Riesgos de los componentes	33
C.	Viabilidad del Programa	34
1.	Protección jurídica	34
2.	Apoyo al diseño y ejecución de políticas preventivas y de acceso a la justicia	34
3.	Justicia provincial y ordenamiento normativo	35
4.	Medio ambiente, impacto social y mujer	35
D.	Sustentabilidad del Programa	36

LISTA DE ANEXOS

Anexo I-1	Entidades Participantes en el Sistema de Justicia Nacional
Anexo III-1	Marco Lógico del Programa.
Anexo III-2	Calendario de Licitaciones

LISTA DE APENDICES

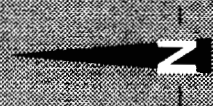
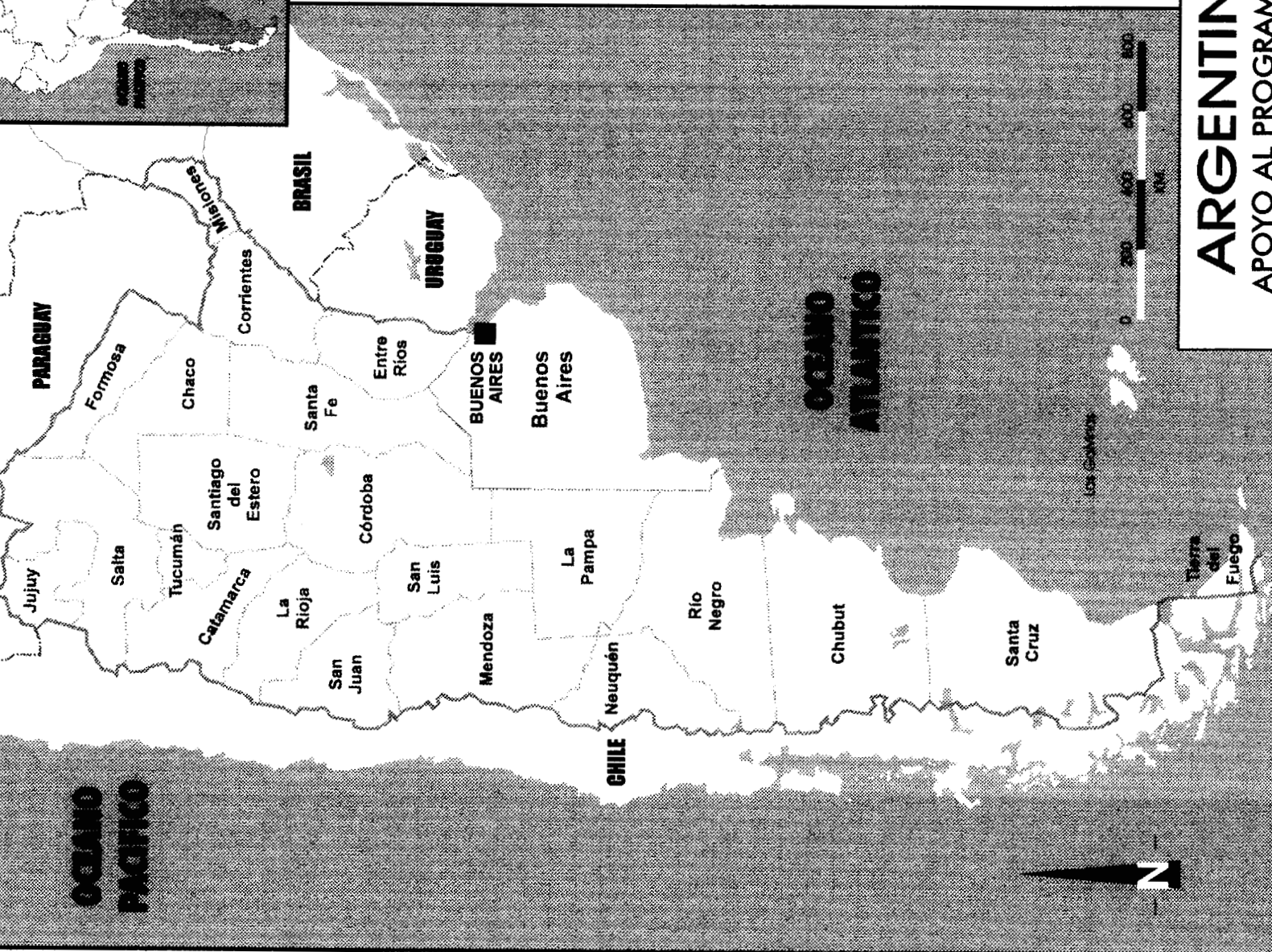
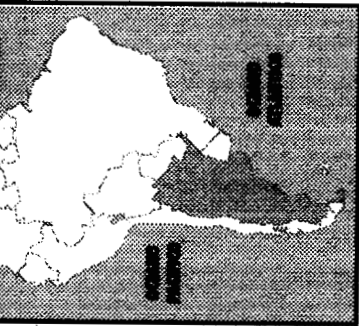
Proyecto de resolución

ARCHIVOS TECNICOS DEL PROGRAMA

- Términos de referencia de los servicios de consultoría, especificaciones técnicas de los bienes y descripción detallada de los costos y financiamiento por categoría de inversión, para cada componente del Programa.
- Funciones y términos de referencia para la Unidad Ejecutora Central.
- Modelo de convenio subsidiario de participación

SIGLAS Y ABREVIATURAS

AGN	Auditoría General de la Nación
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
BIRF	Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial)
CAE	Cuerpo de Abogados del Estado
CESI	Comité de Medio Ambiente e Impacto Social
CEJURA	Centro de Estudios Judiciales de la República Argentina
CM	Consejo de la Magistratura
CSJ	Corte Suprema de Justicia
DGAF	Dirección General de Administración Financiera del MPF
DNPC	Dirección Nacional de Política Criminal
ECAE	Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado
IMJP	Instituto para el Mejoramiento de la Justicia Provincial
MPD	Ministerio Público de la Defensa
MPF	Ministerio Público Fiscal
OC	Capital Ordinario
PAO	Plan Operativo Anual
PBI	Producto Bruto Interno
PJN	Poder Judicial Nacional
PTN	Procuración del Tesoro de la Nación
SAIJ	Sistema Argentino de Información Jurídica
SPF	Servicio Penitenciario Federal
UEC	Unidad Ejecutora Central
UES	Unidad Ejecutora Sectorial
USAID	Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos



ARGENTINA
APOYO AL PROGRAMA DE
REFORMA DEL SISTEMA DE

ARGENTINA

Datos Básicos Socioeconómicos
Estadísticas y Análisis Cuantitativo
Banco Interamericano de Desarrollo

Resumen Ejecutivo

Estadísticas Sociales

Extensión territorial (Km2)	1996	2.776.889
Población (miles)	1996	34.665
Población menor de 15 (porcentaje)	1995	28,7
Población de 60 y mayor (porcentaje)	1995	13,3
Población (tasa media anual de crecimiento)	1987-1996	1,2
Rural (porcentaje)	1996	12,0
Densidad (habitantes por Km2)	1996	12,5
Estadísticas vitales		
Fertilidad total (tasa por mujer)	1993	2,7
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	1992	20,3
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	1993	23,6
Mortalidad (tasa por 1.000 habitantes)	1992	8,6
Esperanza de vida al nacer (años)	1993	72,3
Pobreza y desigualdad		
Coeficiente de Gini	1994	0,46
Incidencia de la pobreza del BID (porcentaje)	1994	5
Brecha de la pobreza (porcentaje)	1994	1
Fuerza de trabajo (miles)	1992	11.910
Tasa de participación (porcentaje)	1993	68,1
Tasa de desempleo (porcentaje)	II-1996	17,0
Salario mínimo real (índice 1990=100)	1995	198,5
Educación		
Tasa bruta de matrícula - primaria	1993	107,0
Tasa bruta de matrícula - secundaria	1991	74,3
Tasa bruta de matrícula - terciaria	1991	42,8
Promedio de alumnos por maestro - primaria	1991	16,5
Promedio de alumnos por maestro - secundaria	1991	8,0
Promedio de escolaridad (población > 25 años)	1995	7,2
Analfabetismo (porcentaje)	1995	3,8

17 de noviembre de 1997

ARGENTINA

Datos Básicos Socioeconómicos
Estadísticas y Análisis Cuantitativo
Banco Interamericano de Desarrollo

Resumen Ejecutivo

Estadísticas Económicas

Tasa de cambio (Pesos/US\$)	9-1997	1,0
PIB per cápita (tasa media anual de crecimiento)	1987-1996	1,4
PIB (tasa media anual de crecimiento)	1987-1996	2,6
Agricultura	1987-1996	1,8
Términos de intercambio agrícolas	1984-1993	-3,8
Industria	1987-1996	2,0
Servicios	1987-1996	3,1
Inversión interna bruta (% del PIB)	1996	18,4
Ahorros domésticos brutos (% del PIB)	1995	18,0
Precios al consumidor (variación en doce meses)	8-1997	0,8
Balance global del sector público NF (% del PIB)	1996	-1,8
Crédito interno (% del PIB)	1996	24,6
Sector privado	1996	18,3
Sector público	1996	6,4
Balanza de pagos (millones de US\$)		
Saldo en cuenta corriente	1996	-3.952
Balanza comercial	1996	1.621
Balanza en cuenta de capital y financiera	1996	7.734
Variación de reservas (- aumento)	1996	-3.782
Saldo en cuenta corriente (% del PIB)	1996	-1,8
Balanza en cuenta de capital y financiera (% del PIB)	1996	3,5
Deuda externa total (millones de US\$)	1996	99.708
Deuda a largo plazo	1995	73.446
Deuda a corto plazo	1995	10.170
Servicio de la deuda total	1996	11.200
Pago de intereses	1995	520
Deuda como proporción del PIB (porcentaje)	1996	44,9
Relación del servicio de la deuda (porcentaje)	1996	41,3

17 de noviembre de 1997

ARGENTINA

Datos Básicos Socioeconómicos

1. Pobreza y desigualdad

Porcentajes

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Coefficiente de Gini
Urbana	0,48	0,46
Rural
Incidencia de la pobreza del BID
Urbana	4	5
Rural
Brecha de la pobreza
Urbana	1	1
Rural

2. Salud y nutrición

Mortalidad por causa - Porcentajes

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Enfermedades transmisibles y perinatales	9,9	9,7	9,5	9,5	9,8
Enfermedades no transmisibles	63,0	62,5	63,1	63,6	62,9
Causas externas y otras causas	24,8	25,2	24,7	24,0	24,6
Causas mal definidas	2,3	2,5	2,7	2,9	2,8

Porcentaje del gasto del gobierno central

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Gasto en salud	2,1	2,0	3,0	2,8
Hospitales	1,9	1,8	2,6	2,5
Clínicas y practicantes
Otros	0,0	0,0	0,4	0,3

Inmunización como porcentaje del grupo de edades Nutrición/per capita en unidades

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Otros indicadores										
Niños (< 1 año) vacunados: DPT3	75,0	61,0	80,0	87,1	80,8	80,8	81,0	82,3	82,4	...
Niños (< 1 año) vacunados: Sarampión	81,0	68,0	89,0	93,1	100,0	90,8	94,9	95,6	95,4	...
Acceso a agua potable (% población)	64,3
Doctores por 1000 habitantes
Camas de hospital por 1000 habitantes	4,6
Ingestión diaria de calorías	3098,0	3090,0	3052,0	2964,0	2999,0	2880,0
Ingestión diaria de proteínas	100,3	100,0	99,0	94,1	98,0	99,3

3. Educación

Porcentajes

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Tasa neta de matrícula										
Primaria	97,2	95,0
Tasa bruta de matrícula										
Primaria	110,7	111,4	111,0	111,0	111,0	...	107,0
Secundaria	70,2	70,7	74,3
Terciaria	40,4	42,8
Tasa de supervivencia en primaria

ARGENTINA

Datos Básicos Socioeconómicos

3. Educación (cont.)

Relaciones

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Promedio de alumnos por maestro										
Primaria	19,5	19,3	16,5
Secundaria	7,2	7,1	8,0

Porcentaje del gasto del gobierno central

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Gasto en educación	6,9	9,3	9,9	9,4
Pre-primaria a Secundaria	3,8	4,9	5,8	5,4
Terciaria	2,9	4,2	3,8	3,7
Otros	0,3	0,3	0,3	0,2

4. Mercado de trabajo

Porcentajes Índice 1990=100

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Fuerza laboral por sector										
Agricultura
Industria
Servicios
Tasa de participación	63,8	65,0	64,6	65,5	68,1
Hombres
Mujeres
Tasa de desempleo	5,9	6,3	7,6	7,5	6,5	7,0	9,6	11,2	16,4	...
Índice del salario mínimo real	301,4	234,2	104,6	100,0	126,2	112,8	174,6	202,4	198,5	...

5. Tasas de cambio

Pesos/US\$, fin de período Índice 1990=100

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Tasa de cambio	0,0	0,0	0,2	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Índice efectivo real	119,1	130,3	148,7	100,0	73,4	64,6	59,0	58,1	57,7	...

6. Precios

Tasa media anual de crecimiento porcentual

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Índice de precios al consumidor	123,1	348,3	3086,9	2313,7	171,7	24,9	10,6	4,2	3,4	0,2
Índice de precios al por mayor	200,0	466,7	3347,1	1606,5	110,5	5,5	2,1	2,0	6,2	3,3

7. Liquidez internacional

Millones de US\$

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Reservas	3038	4784	2884	6013	7435	11436	15463	15978	15967	19715
Reservas menos oro	1617	3363	1463	4592	6005	9990	13791	14327	14288	18104
Derechos especiales de giro (DEG)	...	0	0	297	193	375	453	563	539	399
Posición de reservas en el FMI
Divisas	1617	3363	1463	4295	5812	9615	13339	13764	13749	17705
Oro (valoración nacional)	1421	1421	1421	1421	1430	1446	1672	1651	1679	1611

ARGENTINA

Datos Básicos Socioeconómicos

8. Cuentas nacionales

Millones de US\$ de 1990
US\$ de 1990

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Producto interno bruto	170243	166852	155364	153216	169073	186470	198057	214798	205008	214617
PIB per cápita	5467	5291	4866	4740	5168	5633	5914	6341	5983	6191

Tasa anual de crecimiento porcentual (precios constantes)

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
PIB per cápita	1,3	-3,2	-8,2	-2,5	9,2	9,0	5,0	7,3	-5,7	3,1
PIB por tipo de gasto (pm)	2,6	-2,0	-7,0	-1,3	10,5	10,3	6,3	8,5	-4,6	4,3
Consumo	2,4	-4,2	-6,1	-1,1	14,3	13,3	5,7	6,9	-6,1	5,2
Inversión interna bruta	10,2	-3,5	-21,6	-15,2	31,5	33,5	16,0	21,8	-16,3	8,3
Exportaciones de bienes y servicios	-2,8	18,7	7,5	16,8	-5,1	2,1	2,4	15,9	22,7	6,3
Importaciones de bienes y servicios	15,0	-9,2	-16,4	-0,7	75,6	66,5	13,4	22,5	-11,6	15,9
PIB por sector de origen (pm)										
Agricultura, silvicultura y pesca	-2,7	8,3	-8,6	8,4	4,3	-1,0	3,1	3,6	2,3	1,6
Explotación de minas y canteras	7,5	5,4	-0,8	2,9	2,9	11,1	10,0	8,8	6,7	7,6
Manufacturas	1,0	-4,5	-7,6	-2,3	9,9	10,2	5,1	6,2	-7,0	5,2
Electricidad, gas y agua	5,1	-6,8	-4,8	7,3	3,3	8,7	10,4	9,5	5,6	13,4
Construcción	14,5	-2,9	-24,5	-16,1	25,4	16,9	11,2	15,2	-10,9	1,1
Comercio al por mayor y al por menor	0,7	-4,5	-7,1	-0,7	15,3	14,4	4,2	8,5	-7,9	...
Transportes y comunicaciones	3,6	-1,8	-1,1	-3,2	10,4	12,8	5,5	9,7	0,2	...
Servicios financieros	2,8	-2,0	-8,0	-2,1	17,8	14,2	9,2	12,8	-5,4	...
Gobierno
Otros servicios	3,7	-0,1	-1,1	-0,9	3,3	6,1	6,2	7,2	-1,9	...

Composición porcentual (precios corrientes)

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
PIB por tipo de gasto (pm)										
Consumo	80,1	78,0	78,1	80,2	83,7	84,9	83,6	82,6	82,0	...
Inversión interna bruta	19,6	18,6	15,5	14,0	14,6	16,7	18,4	20,0	18,0	18,4
Exportaciones de bienes y servicios	7,9	9,5	13,0	10,4	7,8	6,7	6,2	6,7	8,6	...
Importaciones de bienes y servicios	7,6	6,2	6,6	4,6	6,1	8,3	8,2	9,3	8,6	...
PIB por sector de origen (pm)										
Agricultura, silvicultura y pesca	8,1	9,0	9,6	8,1	6,7	6,0	5,5
Explotación de minas y canteras	1,8	2,3	3,2	2,9	2,1	1,8	1,7
Manufacturas	27,5	28,0	30,9	26,8	24,4	21,8	20,5
Electricidad, gas y agua	2,0	1,9	2,0	1,9	1,6	1,7	1,8
Construcción	6,4	6,3	6,2	4,4	4,7	5,3	5,6
Comercio al por mayor y al por menor	15,4	15,5	16,9	15,6	15,9	15,4	14,9
Transportes y comunicaciones	4,5	5,0	4,2	5,2	5,2	5,2	5,1
Servicios financieros	15,9	15,2	12,1	13,7	14,7	16,7	17,3
Gobierno
Otros servicios	18,3	16,8	14,8	21,3	24,8	26,1	27,6

ARGENTINA

Datos Básicos Socioeconómicos

9. Sector público no financiero

Como porcentaje del PIB

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Ingresos corrientes	23,5	22,1	24,0	20,4	20,3	20,9	19,4	17,8	17,5	15,9
Gastos corrientes	25,0	24,8	25,2	20,9	20,8	20,3	17,2	16,9	17,3	16,7
Ahorro corriente	-1,5	-2,7	-1,2	-0,5	-0,5	0,6	2,3	1,0	0,2	-0,8
Gastos de capital	3,9	4,2	3,1	1,4	1,0	0,8	1,5	1,4	1,1	1,2
Balance global (- déficit)	-5,0	-6,0	-3,8	-1,5	-0,5	0,6	1,1	-0,1	-0,5	-1,8
Financiamiento doméstico	0,3	0,2	1,4	-0,1	-0,6	-0,4	-0,6

10. Panorama monetario

Como porcentaje del PIB

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Crédito interno	19,7	18,9	13,6	21,1	20,9	20,4	22,0	23,5	24,4	24,6
Sector público	9,6	10,4	7,5	12,1	10,7	7,8	4,2	4,1	5,7	6,4
Sector privado	10,2	8,6	6,1	9,0	10,2	12,6	17,8	19,4	18,7	18,3
Dinero (M1)	3,4	2,2	0,9	1,9	2,8	4,2	4,7	5,2	5,3	5,9

11. Comercio exterior

Por destino en porcentaje - valuación de aduana Índice 1990=100

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Exportaciones de bienes (fob)										
Países desarrollados	49,7	49,4	44,9	49,7	49,4	46,4	42,7	39,1	32,5	30,7
Países en desarrollo	50,3	50,6	55,1	50,3	50,6	53,6	57,3	60,9	67,5	69,3
América Latina	21,5	20,3	25,8	26,0	29,2	32,9	41,4	43,0	46,2	47,4
Importaciones de bienes (cif)										
Países desarrollados	61,7	59,1	59,7	58,9	53,3	54,3	55,0	56,9	54,9	52,3
Países en desarrollo	38,3	40,9	40,3	41,1	46,7	45,7	45,0	43,1	45,1	47,7
América Latina	30,4	34,1	33,5	34,7	30,8	34,6	33,4	29,5	30,7	29,6
Índice de los términos de intercambio	91,7	97,9	96,6	100,0	101,6	109,5	111,6	109,7	111,6	120,5

Millones de US\$ - valuación de aduana Composición porcentual

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Exportaciones de bienes (fob)	6360,2	9134,2	9565,4	12351,5	11974,9	12234,9	13114,4	15803,3	20962,6	...
Productos alimenticios	61,1	59,7	55,0	56,3	60,1	61,0	55,3	52,0	49,8	...
Productos agrícolas no elaborados	3,5	4,7	3,9	4,3	3,8	2,8	2,1	3,4	4,3	...
Combustibles	1,3	1,5	3,4	7,8	6,3	8,7	9,5	10,5	10,4	...
Productos minerales y metales	8,0	9,5	12,4	8,8	7,0	4,7	4,5	4,3	5,1	...
Productos manufacturados	26,0	24,6	25,3	22,8	22,9	22,8	28,6	29,9	30,4	...
Productos químicos	6,6	7,5	7,2	6,2	5,9	5,9	5,3	5,8	6,3	...
Maquinaria y material de transporte	6,4	6,1	6,5	5,8	6,9	7,5	11,0	11,2	10,8	...
Otros productos manufacturados	13,0	11,0	11,6	10,8	10,0	9,3	12,3	12,9	13,3	...
Importaciones de bienes (cif)	5817,8	5321,5	4200,5	4076,7	8275,3	14863,7	16772,9	21581,1	20121,7	...
Bienes de capital	25,3	23,7	22,1	19,8	21,5	26,4	30,0	35,6	29,9	...
Bienes de consumo	6,2	5,3	5,2	8,0	17,9	21,6	21,1	19,9	17,3	...
Bienes intermedios	67,8	70,8	72,5	71,8	58,1	46,6	43,8	44,5	52,3	...
Combustibles	0,4	0,0	0,0	0,2	0,0	0,5	...
Otros	0,3	0,2	0,2	0,3	2,4	5,4	5,1

ARGENTINA

Datos Básicos Socioeconómicos

12. Balanza de pagos

Millones de US\$

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Saldo en cuenta corriente	-4235	-1572	-1305	4552	-647	-5401	-7046	-9363	-2446	-3952
Balanza comercial	1017	4242	5709	8628	4419	-1450	-2426	-4236	2238	1621
Exportaciones de bienes (fob)	6360	9134	9573	12354	11978	12235	13117	15840	20964	23811
Importaciones de bienes (fob)	5343	4892	3864	3726	7559	13685	15543	20076	18727	22190
Balanza de servicios	-772	-687	-600	-674	-1599	-2209	-2660	-2856	-2175	-2412
Transporte	-83	43	155	219	-161	-388	-746	-966	-904	...
Viajes	-275	-341	-224	-268	-957	-1430	-1608	-1639	-1010	...
Otros servicios	-414	-389	-531	-625	-481	-391	-306	-251	-2175	...
Addendum: Fletes y seguros	108	137	193	142	-224	-513	-584	-853
Balanza de renta	-4472	-5127	-6422	-4400	-4260	-2404	-2372	-2590	-2941	-3495
Remuneración de empleados	13	0	0	0	0	0	0	0
Renta de la inversión	-4485	-5127	-6422	-4400	-4260	-2404	-2372	-2590	-2941	...
Balanza de transferencias corrientes	-8	0	8	998	793	662	412	319	432	334
Gobierno general	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros sectores	-8	0	8	998	793	662	412	319
Balanza en cuenta de capital y financiera	3045	3625	-272	-2145	3028	8337	11579	10040	2296	7734
Balanza en cuenta de capital
Balanza financiera	3045	3625	-272	-2145	3028	8337	11579	10040	2377	7734
Inversión directa	-19	1147	1028	1836	2439	2562	3482	477	4179	4340
En el extranjero	0	0	0	0	0	7	0	-126
En la economía declarante	-19	1147	1028	1836	2439	2555	3482	603
Inversión de cartera	-96	-656	2618	-1309	483	715	26421	3662	4701	...
Activos	0	0	0	-241	-8261	-80	-2037	-185	64	...
Pasivos	-96	-656	2618	-1068	8744	795	28458	3847	4637	...
Otra inversión	3160	3134	-3918	-2672	106	5060	-18324	5901	-6503	3394
Activos	104	879	-399	661	426	4038	399	2853
Pasivos	3056	2255	-3519	-3333	-320	1022	-18723	3048
Variación de reservas (- aumento)	1302	-1888	1826	-3121	-2040	-3261	-4279	-685	69	-3782
Errores y omisiones	-112	-165	-249	715	-341	325	-254	7	0	...

13. Deuda externa

Millones de US\$

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Deuda total	58107	56610	59615	54672	56778	59269	70575	77434	89747	99708
Deuda a largo plazo	51074	49346	53632	48706	49374	49855	58403	66052	73446	...
Pública y garantiz. por el gobierno	49221	47546	51832	46906	47574	47611	52034	55832	62181	...
Bilateral	4730	4710	5246	6219	7157	8130	9722	11082	11709	...
Multilateral	4229	4029	4361	5007	5419	5037	7112	7748	9414	...
Tenedores de bonos	9527	9117	9824	11514	11661	11620	33974	35628	39441	...
Bancos	28774	27943	30869	22661	22019	21618	804	916	1207	...
Proveedores	1576	1392	1242	1218	1084	1015	422	459	410	...
Otros acreedores	386	355	291	286	234	192	0	0	0	...
Privada no garantizada	1853	1800	1800	1800	1800	2244	6369	10220	11265	...
Uso de crédito del FMI	3853	3678	3100	3083	2483	2314	3520	4211	6131	...
Deuda a corto plazo	3180	3586	2883	2883	4921	7100	8652	7170	10170	...
Atrasos en los pagos de la deuda	351	2131	5642	7562	8625	9076	1	1	0	...
Servicio de la deuda total	6988	5023	5060	6161	5545	5003	6556	8175	9732	11200
Pública y garantiz. por el gobierno	4624	3746	2764	4812	3872	3320	5131	4523	6303	...
Bilateral	214	239	95	130	261	336	548	671	1677	...
Multilateral	482	681	771	780	1101	1174	1039	1252	1129	...
Privada no garantizada	576	393	269	144	133	361	267	1050	2150	...
FMI recompras y cargos	844	761	992	975	1228	1077	590	618	759	...
Deuda a corto plazo (sólo intereses)	200	123	333	231	312	246	568	502	520	...

ARGENTINA

Datos Básicos Socioeconómicos

13. Deuda externa (cont.)

Relaciones porcentuales

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Deuda como proporción del PIB	40	38	41	36	32	29	32	36	43	45
Relación del servicio de la deuda	86	45	43	42	39	34	42	44	41	41

... No disponible

0,0 Indica que el monto es cero o no significativo

ARGENTINA

Datos Básicos Socioeconómicos

Fuentes y notas

Resumen Ejecutivo

Estadísticas sociales:

Extensión territorial: Organización de los Estados Americanos (OEA), América en cifras, 1974.

Población: estimaciones del BID basadas en datos del Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE) y la División de Población de las Naciones Unidas (UNPOP).

Estadísticas vitales:

Banco Mundial, Social Indicators of Development (WBSID) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Anuario Estadístico.

Fuerza de trabajo: WBSID.

Educación:

Promedio de escolaridad (población >25 años): Años de educación terminados para la población mayor de 25 años. Estimaciones del BID basadas en datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), utilizando el método del inventario perpetuo.

Analfabetismo: Porcentaje de la población adulta. Base de datos de UNESCO.

Estadísticas económicas:

Términos de intercambio agrícolas: Índice de la razón entre el deflactor del PIB agrícola y el deflactor del PIB no-agrícola. Estimaciones del BID usando datos de las Cuentas nacionales. Año base 1990.

1. Pobreza y desigualdad:

Coefficiente de Gini: Índice de desigualdad en la distribución del ingreso. Un coeficiente igual a uno (1) indica desigualdad perfecta, y un coeficiente igual a cero (0) indica igualdad perfecta.

Incidencia de la pobreza: Número de pobres como porcentaje de la población total, usando una línea de pobreza de US\$60 (precios constantes de 1985) por mes per capita inflados usando el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Brecha de la pobreza: El déficit medio de ingresos de un individuo pobre con respecto a la línea de pobreza, multiplicado por el índice de recuento.

Estimaciones del BID basadas en datos de ingreso de la Encuesta Permanente de Hogares. Sólo el rea del Gran Buenos Aires para los años 1980-1989, 1994 cubre 23 provincias urbanas. Los datos de ingreso fueron corregidos para compensar por posible subestimación usando estimados de ingreso de Cuentas nacionales. Los estimados de pobreza son "límites inferiores". Gran Buenos Aires 3% en 1994.

2. Salud y nutrición:

Causas de Mortalidad: Principales causas de muertes por tipo de enfermedad. Base de datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Gasto en salud: Gobierno central consolidado. Fondo Monetario Internacional (FMI), Government Finance Statistics (GFS)(Cintas magnéticas).

Vacunación: Porcentaje de menores de un año vacunados contra dpt3 y sarampión (WBSID).

Acceso a agua potable: Porcentaje de la población con acceso a ella (WBSID).

Doctores/camas de hospital por cada 1000 habitantes: Número de doctores/camas de hospital por cada 1000 habitantes (WBSID).

Ingestión diaria de calorías y proteínas: Ingestión aparente promedio diaria per capita. Base de datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

3. Educación:

Tasa neta de matrícula en primaria: Porcentaje del grupo de la población que oficialmente deberían estar en primaria y que están matriculados en primaria. (CEPAL, Anuario Estadístico).

ARGENTINA

Datos Básicos Socioeconómicos

Tasa bruta de matrícula: Matrícula total en primaria, secundaria o terciaria, sin importar edad, como porcentaje de la población que oficialmente debería estar en primaria, secundaria o terciaria (de 20 a 24 años). Estimaciones del BID basadas en datos de UNESCO y UNPOP; WBSID.

Promedio de alumnos por maestro: Número de estudiantes por maestro en primaria y secundaria. Base de datos de UNESCO, y WBSID.

Gasto en educación: Gobierno central consolidado. Fondo Monetario Internacional (FMI), Government Finance Statistics (GFS).

4. Mercado de trabajo:

Fuerza de trabajo por sector: Fuerza de trabajo en el sector como porcentaje de la fuerza total de trabajo.

Tasa de participación: Población Económicamente Activa como porcentaje de la población mayor de 15 años. Banco Mundial.

Tasa de desempleo: Nacional urbana. Programa Regional del Empleo para América Latina y El Caribe (PREALC).

Índice del salario mínimo real: Año base 1990. CEPAL, Estudio Económico de América Latina y el Caribe.

5. Tasas de cambio:

FMI, EFI. Tasa oficial.

Índice efectivo real: Estimaciones del BID basadas en datos del FMI.

6. Precios:

FMI, EFI. Los datos anuales son tasas de crecimiento de promedios anuales; los mensuales corresponden a la variación en doce meses.

7. Liquidez internacional:

FMI, EFI.

8. Cuentas nacionales:

PIB en US dólares de 1990: estimaciones del BID.

PIB por tipo de gasto y por sector de origen: Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, Secretaría de Programación Económica. El sector gobierno está incluido en el de otros servicios.

9. Sector público no financiero:

Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, Secretaría de Hacienda. Corresponde al sector público nacional no financiero, excluyendo las provincias.

10. Panorama monetario:

FMI, EFI, y estimaciones del BID basadas en información del Banco Central de Argentina (datos a junio de cada año).

11. Comercio exterior:

Comercio por destino y origen: FMI, Direction of Trade Statistics (cintas magnéticas).

Términos de intercambio: CEPAL, Balance preliminar de la economía de América Latina y el Caribe.

Composición de exportaciones: División de Estadística de las Naciones Unidas (UNSTAT), Commodity Trade (COMTRADE) Data Base; exportaciones incluyen reexportaciones.

Composición de importaciones: CEPAL. Carburantes y automóviles están incluidos en otros.

12. Balanza de pagos:

Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, Subgerencia de Programación Macroeconómica y FMI, Balance of Payments Statistics (cintas magnéticas).

13. Deuda externa:

Banco Mundial, World Debt Tables (cintas magnéticas) y estimaciones.

ARGENTINA

Servicios de Apoyo Regional

RE/IRO

PRESTAMOS BID

APROBADOS AL 31 DE OCTUBRE DE 1997

	US\$ Miles	Porcentaje
TOTAL APROBADO	10,864,256	
DESEMBOLSADO	7,767,721	71.5%
POR DESEMBOLSAR	3,096,535	28.5%
CANCELADO	1,109,377	10.2%
AMORTIZADO	3,079,304	28.3%
APROBADO POR FONDO		
CAPITAL ORDINARIO	10,174,636	93.7%
FONDO PARA OPERACIONES ESPECIALES	640,607	5.9%
OTROS FONDOS	49,014	0.5%
SALDO DE LA DEUDA	4,688,417	
CAPITAL ORDINARIO	4,495,651	95.9%
FONDO PARA OPERACIONES ESPECIALES	190,649	4.1%
OTROS FONDOS	2,118	0.0%
APROBADOS POR SECTOR		
AGRICULTURA Y PESCA	839,926	7.7%
INDUSTRIA, TURISMO, CIENCIA Y TECNOLOGIA	699,226	6.4%
ENERGIA	1,966,923	18.1%
TRANSPORTACION Y COMUNICACION	805,278	7.4%
EDUCACION	568,888	5.2%
SALUD Y SANEAMIENTO	919,920	8.5%
MEDIO AMBIENTE	31,541	0.3%
DESARROLLO URBANO	476,336	4.4%
INVERSION SOCIAL Y MICROEMPRESA	849,718	7.8%
REFORMA Y MODERNIZ. DEL SECTOR PUBLICO	3,175,101	29.2%
FINANCIAMIENTO A EXPORTACIONES	180,969	1.7%
PREINVERSION Y OTROS	350,431	3.2%

*Cifras netas de cancelaciones con ajustes monetarios y recuperaciones en prestamos para financiamiento de exportaciones.

ARGENTINA

SERVICIOS DE APOYO REGIONAL ITC/IRO

PROGRAMA TENTATIVO DE PRESTAMOS

US\$ Millones

1997			
AR0144	APOYO REESTRUCTURACION EMPRESARIAL	100.0	APROBADO
AR0161	ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	33.0	APROBADO
AR0169	APOYO PRODUCTIVIDAD/EMPLEABILIDAD JOVNES	370.0	APROBADO
AR0220	APOYO INSTITUCIONALIZACION AFIP	96.0	APROBADO
AR0200	PROYECTO AES PARANA	66.0	APROBADO
AR0136	RECUPERACION ECOLOG. MATANZA-RIACHUELO	250.0	APROBADO
AR0181	REFORMA EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSIT.	82.5	APROBADO
AR0151	INVERSIONES EN GRANDES CIUDADES	260.0	APROBADO
TOTAL A		1,257.5	
TOTAL 1997		1,257.5	
1998			
AR0124	APOYO REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA	10.5	
AR0209	APOYO REFORMA INTEGRAL PROVINCIA MENDOZA	80.0	
AR0226	TRENES DE BUENOS AIRES	75.0	
AR0234	CORREO ARGENTINO	73.0	
AR0218	APOYO REFORMA FISCAL A LA GCBA	200.0	
AR0175	PROG.NAC.DE AGUA Y ALCANTARILLADO	250.0	
AR0127	PROGRAMA DE CREDITO MICROEMPRESAS II	100.0	
AR0120	REF. ATENCION PRIMARIA -SALUD	150.0	
AR0223	APOYO PROVINCIA DE SAN LUIS	70.0	
AR0198	NINOS EN CIRCUNSTANCIAS ESP.DIFICILES II	10.0	
AR0227	FONDO AMBIENTAL NACIONAL	40.0	
AR0235	TRANSPORTADORA GAS DEL SUR (TGS)	50.0	
TOTAL A		1,108.5	
AR0202	PASOS CORDILLERANOS	200.0	
AR0210	APOYO A PROVINCIA DE LA RIOJA	50.0	
AR0230	APOYO A LA PROVINCIA DE NEUQUEN	100.0	
AR0231	FORTAL. INSTIT. CONSEJO NAC. DE LA MUJER	15.0	
AR0199	RECUPERACION DEL PATRIMONIO HISTORICO	30.0	
TOTAL B		395.0	
TOTAL 1998		1,503.5	



BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
SERVICIOS DE APOYO REGIONAL
UNIDAD DE RECURSOS DE INFORMACION GERENCIAL

ARGENTINA

CARTERA EN EJECUCION AL 31 DE OCTUBRE DE 1997

(Miles de US\$)

PERIODO DE APROBACION	NUMERO PROYECTOS	MONTO APROBADO	MONTO DESEMBOLSADO	% DESEMBOLSADO
Antes de 1991	1	97,500	34,114	34.99%
1991 - 1992	5	387,066	297,334	76.82%
1993 - 1994	11	1,650,350	480,780	29.13%
1995 - 1996	12	1,434,268	410,969	28.65%
1997	5	731,000	12,750	1.74%
TOTAL	34	\$4,300,184	\$1,235,947	28.74%

* Cifras netas de cancelaciones . Excluye préstamos para financiamiento de exportaciones.

APOYO AL PROGRAMA DE REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA

(AR-0124)

RESUMEN EJECUTIVO

PRESTATARIO Y GARANTE: La Nación Argentina.

ORGANISMO EJECUTOR: Ministerio de Justicia de la Nación y Entidades del Sistema de Justicia.

MONTO Y FUENTE:

BID (OC):	US\$10,5 millones
Aporte local:	<u>US\$10,5 millones</u>
Total:	US\$21,0 millones

PLAZOS Y CONDICIONES FINANCIERAS:

Plazo de amortización:	20 años
Período de desembolso:	4 años
Tipo de interés:	variable
Inspección y vigilancia:	1%
Comisión de crédito:	0.75% (del saldo no desembolsado)
Moneda:	Dólares de los EE.UU provenientes de la Facilidad Unimonetaria.

OBJETIVOS: El objetivo del Programa es apoyar el proceso de reforma del sistema de justicia, mediante el financiamiento de proyectos de carácter puntual y catalítico, que pudieran ser replicables, para apoyar el proceso de cambio y modernización del sector justicia. Estos proyectos contribuirían al desarrollo de un sistema de justicia más confiable e independiente que sea eficiente y accesible.

DESCRIPCION: Para el logro del objetivo del Programa, se apoyarían actividades agrupadas en tres subprogramas: (i) protección jurídica; (ii) apoyo al diseño y ejecución de políticas preventivas del delito y de acceso a la justicia; y (iii) justicia provincial y ordenamiento normativo.

1. Subprograma de protección jurídica (US\$4.311.000)

El subprograma incluiría dos componentes: (i) el fortalecimiento de la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), para mejorar la capacidad de defensa del Estado en juicio, mediante la modernización de los mecanismos de gestión y control de la cartera de

juicios del Estado y la capacitación de su personal y del Cuerpo de Abogados del Estado; y (ii) el fortalecimiento del Ministerio Público Fiscal (MPF), para fortalecer la capacidad del MPF en la defensa de los intereses de la sociedad ante los órganos jurisdiccionales, mediante el apoyo a la gestión administrativo-financiera y de personal del MPF, el desarrollo de su normativa interna, la instalación de sistemas de información y la capacitación de fiscales.

2. Subprograma de apoyo al diseño y ejecución de políticas preventivas del delito y de acceso a la justicia (US\$ 6.232.000)

El subprograma incluiría cuatro componentes: (i) la evaluación y mejoramiento de la mediación, para apoyar el desarrollo de la mediación como método alternativo de resolución de conflictos; (ii) el apoyo a la defensoría pública, para mejorar la defensa de los derechos y el acceso a la justicia de los sectores de población de menores ingresos, mediante el fortalecimiento institucional y técnico de la Defensoría, el desarrollo e instalación de sistemas de información y la capacitación del cuerpo de defensores oficiales y del personal administrativo de la Defensoría; (iii) el apoyo a la formulación de políticas de prevención del delito, a través del desarrollo de sistemas de información y el fortalecimiento de la capacidad técnica de la Dirección Nacional de Política Criminal (DNPC); y (iv) la informatización del servicio penitenciario, para facilitar el acceso a la justicia de la población procesada o condenada, a través del desarrollo de sistemas de información que permitan la observancia de las garantías y derechos de los internos y el control de los tiempos de reclusión; y

3. Subprograma de justicia provincial y ordenamiento normativo (US\$ 4.292.000)

El subprograma incluiría dos componentes: (i) el mejoramiento de la justicia provincial, para apoyar la modernización de la administración de la justicia en las provincias, mediante la creación del Instituto para el Mejoramiento de la Justicia Provincial (IMPJ), la ejecución de actividades de capacitación, la difusión de mejores prácticas de administración judicial y experiencias modelo, y el desarrollo de estudios y encuestas sobre la eficiencia de la administración de la justicia provincial; y (ii) la elaboración de un digesto ordenado legislativo que contenga de manera clasificada y consolidada toda la

legislación nacional vigente y el desarrollo de un manual de técnica legislativa, a fin de contribuir al ordenamiento normativo a nivel nacional.

**FECHA REVISION
AMBIENTAL/SOCIAL:**

El Comité de Medio Ambiente e Impacto Social (CESI) en la reunión del 16 de mayo de 1997, dada la naturaleza de la operación no solicitó la elaboración de un estudio adicional de impacto social y ambiental para el Programa (§ 4.32).

BENEFICIOS:

El Programa propuesto debe reducir los costos de transacción asociados a los procesos judiciales mediante las siguientes vías: (i) aumento de la "oferta" a través de la introducción de nuevos esquemas de gerencia y administración en la Fiscalía y Defensoría y el fortalecimiento de las Cortes Provinciales; y (ii) reducción de la "demanda", por medio del fortalecimiento de los sistemas de resolución alternativa de conflictos y la ejecución de políticas de prevención de delito. Finalmente, la mejora de los sistemas de defensa de los intereses públicos deberá representar mejoras en la capacidad estatal de recuperación y defensa de ingresos fiscales.

Además, como resultado del Programa: (i) se fortalecería el sistema de defensa de los intereses del Estado y de la sociedad; (ii) se desarrollaría la mediación como medio alternativo para la resolución de conflictos; (iii) se daría mayor acceso a los sectores de población de bajos ingresos con servicios de defensa pública fortalecidos; (iv) se formularían y aplicarían políticas preventivas del delito; (v) se facilitaría a la población penitenciaria el acceso a la justicia; (vi) se apoyaría la coordinación de iniciativas e intercambio de experiencias a nivel de las Cortes Provinciales a fin de promover la adopción de mejores prácticas en el sector; y (vii) se contribuirá al ordenamiento normativo a fin de garantizar el Estado de Derecho.

RIESGOS:

El Programa en su conjunto es institucionalmente complejo, ya que participarían en la ejecución de sus componentes cinco instituciones distintas: Ministerio de Justicia (mediación, formulación de políticas de prevención del delito, informatización del servicio penitenciario y digesto ordenado); Procuración del Tesoro de la Nación - PTN (fortalecimiento de la PTN); Ministerio Público Fiscal - MPF (fortalecimiento del MPF), Ministerio Público de la Defensa -MPD (defensoría pública), y Junta Federal de Cortes (mejoramiento de la justicia provincial). Para minimizar este riesgo, el esquema de ejecución se ha diseñado de forma tal que permitirá asegurar: (i) la

homogeneidad de criterios en la ejecución mediante la suscripción de convenios interagenciales; (ii) la total independencia funcional de las entidades, otorgándole a las Unidades Ejecutoras Sectoriales (UES) todas las atribuciones decisorias en la selección y control de las adquisiciones; y (iii) la dotación a las Unidades Ejecutoras Sectoriales (UES) y a la Unidad Ejecutora Central (UEC) de profesionales con un alto perfil en las áreas operativas.

**ADQUISICIONES
DE BIENES Y
SERVICIOS DE
CONSULTORIA:**

Se aplicarán los procedimientos vigentes del Banco para la adquisición de bienes y la contratación de servicios de consultoría a ser financiados con los recursos del préstamo. Los montos límites mínimos sobre los cuales las adquisiciones de este Programa se harán por licitación y concurso públicos internacionales son: US\$350.000 para bienes y US\$200.000 para servicios de consultoría. El Programa no prevé el financiamiento de obras (§ 3.28).

**ESTRATEGIA DEL
BANCO EN EL PAIS
Y EN EL SECTOR:**

La estrategia operativa para la acción del Banco en Argentina indica como prioritarias las actividades que se enmarquen en las siguiente tres áreas básicas: (i) profundizar y consolidar la modernización del Estado; (ii) reducir la pobreza y elevar la calidad de vida de la población; y (iii) elevar la productividad y la competitividad de la producción nacional. El Programa propuesto en este documento se enmarca dentro de esta estrategia, ya que el mismo permitiría avanzar en el proceso de apoyo a la reforma y modernización del Estado, específicamente del Sistema de Justicia a Nivel Nacional.

La participación del Banco en el financiamiento del Programa propuesto permitirá impulsar una primera iniciativa de acción conjunta de reforma del sector justicia a nivel nacional donde participarán distintas entidades de los Poderes del Estado, de manera coordinada, pero con la independencia que corresponda. De esta manera se aseguraría una visión integral del proceso y un desarrollo institucional paralelo en el proceso de reforma del sector. Asimismo, se permitirá difundir las mejores prácticas incorporadas en el sector a nivel de los poderes judiciales provinciales.

**CRITERIOS DE LA
POLITICA RELATIVA
A LA POBREZA Y
ASPECTOS SOCIALES:**

Conforme a lo estipulado en el documento de la Octava Reposición (AB-1704), se ha determinado que el Programa propuesto no cumple con las características de una operación focalizada hacia los sectores pobres y no se dirige específicamente a la mujer (§ 4.31).

**EXCEPCIONES A LAS
POLITICAS DEL
BANCO:**

El Programa no contempla excepciones a las políticas del Banco.

**CONDICIONES
CONTRACTUALES
ESPECIALES:**

a. Como condición previa al primer desembolso del Programa:

(i) constancia de la contratación del personal de la Unidad Ejecutora Central (¶ 3.13).

(ii) presentación del Plan Anual Operativo para los componentes a ser ejecutados dentro la órbita del Ministerio de Justicia (¶ 3.20).

b. Como condición previa al primer desembolso para cada componente a ser ejecutado por el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa y la Junta Federal de Cortes:

(i) constancia de haber firmado un convenio subsidiario de participación (¶ 3.10), y en el caso del convenio a suscribirse con la Junta Federal de Cortes, inclusión de las medidas para asegurar su sostenibilidad (¶ 4.34).

(ii) constancia de la contratación o designación del personal que integrará la Unidad Ejecutora Sectorial (¶ 3.16).

(iii) presentación del Plan Anual Operativo para el primer año (¶ 3.20).

c. Igualmente, en el contrato se pactarán disposiciones suficientes para asegurar el seguimiento y evaluación adecuados del Programa (¶ 3.21, 3.23, 3.24 y 3.26), y el reconocimiento de gastos con cargo a la contrapartida local y el financiamiento retroactivo correspondientes (¶ 3.29).

I. ANTECEDENTES

A. Marco de Referencia

1. La Justicia Federal y Provincial

- 1.1 **Poderes judiciales.** En virtud de la estructura de Estado federal, en Argentina coexisten un Poder Judicial de la Nación (PJN) con poderes judiciales provinciales. La Constitución Nacional establece que el PJN es ejercido por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y por los tribunales nacionales con asiento en la Capital Federal y en las provincias. Las constituciones provinciales, a su vez, definen las estructuras judiciales en su territorio, siguiendo, por lo general, los lineamientos de la Constitución Nacional. En cada provincia, se cuenta con una Corte Suprema Provincial (denominada en algunos casos Tribunal Superior de Justicia), con cámaras provinciales de apelación, con juzgados de primera instancia y, en algunos casos, juzgados de paz y comunales.
- 1.2 **Competencia del Poder Judicial de la Nación (PJN).** En razón de la *materia*, corresponde al PJN resolver las causas que versen sobre aspectos regidos por la Constitución Nacional, por las leyes nacionales, los tratados internacionales y los que se refieran al transporte y comercio interprovincial. En razón de las *personas* (*naturales o jurídicas*), el PJN conoce las causas que involucran a personal diplomático, un Estado o ciudadano extranjero, ministros del Poder Ejecutivo federal, y las que se susciten entre dos o más provincias o sus habitantes. En razón del *territorio*, el PJN resuelve los casos que se originan en cualquier territorio sometido a jurisdicción nacional. El PJN, hasta la fecha, ha tenido competencia en el juzgamiento de las causas de derecho común o justicia ordinaria que se originen en la ciudad de Buenos Aires.
- 1.3 **Competencia de la justicia provincial.** Por precepto constitucional, las provincias conservan todo el poder no delegado en el Gobierno Federal. En razón de la *materia*, cada poder judicial provincial es competente para juzgar sobre los puntos regidos por su propia constitución y las leyes provinciales. En razón de las *personas*, cada poder judicial provincial atiende las causas que en materia penal, comercial o civil involucren exclusivamente a los vecinos de su provincia. En razón del *territorio*, es competente en las que se originen en su circunscripción territorial.
- 1.4 **Tamaño y cargas relativas.** La información consolidada disponible para el año de 1992 ^{1/} indica que ingresan al sistema judicial en la Argentina aproximadamente 1,9 millones de casos al año. La justicia nacional atiende la tercera parte de éstos, cuenta con una quinta parte del total de jueces (3.095), y ejecuta el 30% del gasto público en justicia. En Argentina, en ese año, se destinó al

^{1/} Ver Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, La Reforma del Poder Judicial en la Argentina, Buenos Aires, 1996.

sistema de justicia casi el doble de recursos financieros que en otros países tales como Estados Unidos o España, llegando a representar en 1992, un 0,60% como proporción del PBI. Los jueces, en estos últimos dos países, atendieron un 50% más de causas que los jueces en Argentina, utilizando para ello sólo un 60% de la dotación de personal de apoyo por juez. Esto indica que existe un amplio campo para introducir mejoras en el sistema de justicia argentino. En efecto, diagnósticos realizados identifican que un 70% del tiempo disponible del juez es dedicado a solucionar problemas de índole administrativa, que podría ser empleado en la resolución de casos.

2. La Reforma Constitucional de 1994 y el Sistema Judicial Nacional

- 1.5 Los objetivos de la Reforma Constitucional de 1994, en lo que corresponde al sistema de justicia fueron: (i) generar un nuevo equilibrio entre los poderes del Estado, fortaleciendo la independencia judicial; (ii) modificar el sistema de nombramiento y remoción de jueces y magistrados; y (iii) separar el ámbito propiamente jurisdiccional del administrativo para mejorar la eficiencia del sistema.
- 1.6 Para alcanzar los objetivos mencionados, la Reforma alteró la estructura, función y competencia de los órganos que conforman el sistema de justicia argentino a nivel nacional (ver Anexo I-1). Con relación a la **estructura**, se creó el Consejo de la Magistratura (CM) y se elevó a rango constitucional al Ministerio Público (Fiscalía y Defensoría), otorgándosele autonomía administrativa y autarquía financiera. Hoy participan en el sistema de justicia nacional: la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Ministerio Público, el Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo (Ministerio de Justicia), el Poder Legislativo, y la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN).
- 1.7 Con relación a las **funciones y competencias**, la Reforma: (i) modificó el proceso de selección y nombramiento de jueces y magistrados federales. Hasta 1994, los jueces y magistrados federales eran seleccionados y nombrados por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado. A partir de la Reforma, se trasladó la selección de jueces y magistrados federales, mediante concursos públicos, al Consejo de la Magistratura (CM), cuyas propuestas de ternas son vinculantes para el Poder Ejecutivo; (ii) confirió al CM la gestión integral de la carrera judicial; (iii) otorgó al CM la administración de los recursos y la ejecución del presupuesto para la administración de justicia, la cual era atribución de la CSJ; y (iv) otorgó a la ciudad de Buenos Aires un nuevo régimen de gobierno autónomo, bajo el cual se le transferirá la justicia nacional de la Capital Federal, hoy bajo el PJN. El proceso de transferencia se encuentra en etapa de discusión entre el Gobierno de la Ciudad y el Gobierno Nacional, y se espera que en el transcurso del próximo año la transferencia tome lugar.

3. Los principales problemas en el sistema de justicia nacional

- 1.8 Encuestas públicas recientes señalan que la confianza de la sociedad en la administración de justicia se encuentra en un modesto sexto puesto entre ocho posibles, superando únicamente a los partidos políticos y a los sindicatos. 2/
- 1.9 Los diagnósticos realizados 3/ sobre el funcionamiento del sistema enfatizan en que la administración de justicia en Argentina es lenta, con una alta congestión y un inadecuado acceso a la justicia por parte de la ciudadanía. El origen de estos problemas se identifican en distintas fuentes, tales como la debilidad institucional y capacidad de respuesta de los órganos judiciales, inadecuados mecanismos procedimentales, el poco uso de recursos alternativos para la solución de controversias, y la carencia de incentivos en el sistema para mejorar su eficiencia. Todo ello, en el marco de un sistema de justicia que se encuentra en un momento de transformación y definición importante.

a. El Proceso de definición del Consejo de la Magistratura y el desarrollo institucional del Ministerio Público

- 1.10 La definición de la estructura del Consejo de la Magistratura (CM) se encuentra en trámite legislativo. Hasta que no se cuente con dicha aprobación y se conforme el Consejo, no se podrán iniciar los trabajos necesarios para constituir sus unidades administrativas y financieras. Una vez que el Consejo esté operativo, se podrán definir las actividades de apoyo para su gestión y se tendrá la suficiente claridad para impulsar las acciones que sus miembros consideren prioritarias.
- 1.11 En el caso del Ministerio Público, tanto el Ministerio Público de la Defensa como el Ministerio Público Fiscal se encuentran en funcionamiento con un marco normativo provisorio. Para adecuarse al mandato constitucional de 1994, se requiere aprobar la Ley Orgánica que regulará su nuevo funcionamiento y organización. A la fecha, esta Ley cuenta con media sanción legislativa; sin embargo las entidades existen y están operativas, lo cual permite adelantar actividades tendientes a su fortalecimiento y gestión.

(i) El Ministerio Público de la Defensa (MPD)

- 1.12 **Funciones.** La función principal del MPD es representar y defender ante las instancias judiciales, los intereses de aquellos a los que la ley considera menores, incapaces, pobres o ausentes. Por ley, la defensa no sólo se facilita a aquellos que carecen de recursos materiales, sino también a aquellos que por cualquier razón no comparezcan con su propio abogado. Las actividades principales que llevan a cabo los defensores oficiales son dos: brindar

2/ Por nivel de confianza jerarquizado se encuentran: los medios de comunicación social (la prensa); la Iglesia; el Poder Ejecutivo; los sistemas de enseñanza; el Poder Legislativo; la Administración de la Justicia; los partidos políticos; y los sindicatos.

3/ FIEL, La Reforma del Poder Judicial en la Argentina, Buenos Aires, 1996; y Terzano, M. y consultores: Reforma de la Administración de Justicia, IDF-Grant, Informe final, 4 tomos, Buenos Aires, 1994.

asesoramiento jurídico y representar o prestar asistencia letrada 4/.

- 1.13 **Carga de Trabajo.** En los últimos tres años, la carga de trabajo de la Defensoría se ha incrementado sustancialmente. Por ejemplo, mientras en 1994 se defendieron 1.806 causas ante los tribunales orales (65% del total), en 1996 se atendieron 2.547 causas (70% del total), disponiendo para ello del mismo cuerpo de funcionarios. Otro elemento que indica la carga de trabajo de la Defensoría es la relativa desproporción frente al número de fiscales. En general, la proporción de los defensores oficiales frente a los fiscales es de uno a tres. Esto resulta que, en promedio, mientras cada fiscal participa en 76 casos por año los defensores oficiales deben hacerlo en 171 causas. Finalmente, se estima que el 80% de las causas penales que se tramitan en la justicia nacional y federal son llevadas por la defensa oficial.
- 1.14 **Principales problemas.** Para enfrentar el aumento de la carga, el MPD no cuenta con los instrumentos necesarios para asegurar su eficiente administración y funcionamiento. En primer término, la estructura y los procedimientos administrativos requieren de reformas para su modernización. Específicamente, no se dispone de: manuales de organización y funciones en las áreas administrativas, financieras y de personal; de procedimientos técnicos; de sistemas de seguimiento de casos que permitan definir, por ejemplo, la cartera morosa; de datos estadísticos y de indicadores de rendimiento. Las condiciones materiales en las que desarrollan sus labores los defensores oficiales son inadecuadas, dado que en su mayoría no disponen de apoyo informático y de consulta mínimos. Finalmente, se carece de políticas de capacitación de largo plazo, lo que afecta la calidad técnica de la defensa y, en especial, la defensa en juicios orales para la cual se exigen nuevas destrezas.

(ii) El Ministerio Público Fiscal (MPF)

- 1.15 **Funciones.** El MPF es el órgano estatal encargado de representar y defender el interés público ante la justicia. Para el cumplimiento de este cometido, el MPF actúa como ente acusador y fiscalizador en los procesos judiciales. Los fiscales, quienes son autónomos con respecto a los jueces, colaboran en la función de administrar justicia. En el ámbito penal, los fiscales persiguen el castigo de quienes delinquen. En el resto de los fueros (civil, comercial, laboral y contencioso-administrativo), vigilan el cumplimiento de la legalidad, dictaminando ante los jueces.
- 1.16 **Principales problemas.** Hasta 1994, el MPF formaba parte del Poder Judicial de la Nación. En la actualidad, la institución funciona con un marco normativo heredado que no refleja su nuevo estatus jurídico como organismo extra-poder. Se carece de reglamentos

4/ Los defensores se desempeñan en la Capital Federal en los siguientes Fueros: i) ante la Justicia Nacional en los Fueros Criminal de Menores, Civil y Comercial, Penal, Económico y Criminal; y ii) ante la Justicia Federal en los Fueros Criminal, Correccional, Civil y Comercial Contencioso Administrativo. En el interior del país en los juicios orales del Fuero Criminal y sin distinción de fueros ante los juzgados y cámaras federales.

internos que normen, por ejemplo, los regímenes de carrera y disciplinario, y de remoción, reemplazo y licencia de fiscales.

- 1.17 En los últimos años, la estructura de personal del MPF ha crecido en forma importante en respuesta a los nuevos requerimientos. Sin embargo, este crecimiento no ha estado acompañado por un desarrollo institucional apropiado, particularmente en las áreas administrativas, financieras y de personal. En el área de personal, por ejemplo, se cuenta con funcionarios que vienen de otras áreas del Poder Judicial y que carecen de la formación adecuada para el cumplimiento de sus funciones. Además, muchos de los funcionarios se desempeñan sin existir nombramientos formales. Tampoco se cuenta con un inventario completo de los inmuebles utilizados por la Fiscalía, lo que ha dificultado el deslinde patrimonial del Poder Judicial.
- 1.18 Se carece de equipo informático y de sistemas que faciliten los procesos operativos en las áreas de administración, finanzas, presupuesto y recursos humanos. No se dispone de una compilación ordenada de las normas ni de los dictámenes de los Procuradores Fiscales y de material de consulta, ni de información adecuada para el seguimiento de casos. La carencia de estos sistemas de información limita la efectividad de las intervenciones de los fiscales. Finalmente, si bien se cuenta con un Centro de Capacitación de fiscales, su capacidad es limitada y carece de un programa actualizado para atender sus requerimientos.

b. Los métodos alternativos para la resolución de conflictos (mediación)

- 1.19 En 1995, mediante Ley 24.573 se modificó el código procesal civil y comercial de la Nación, introduciéndose la mediación obligatoria, de manera previa a la iniciación de la demanda judicial, con el objeto de aliviar la elevada carga de expedientes que tramitan los tribunales. Esta ley empezó a aplicarse a partir del 23 de abril de 1996 y tiene vigencia hasta el 23 de abril del 2001. ^{5/}
- 1.20 De los 33.000 casos procesados hasta diciembre de 1996, no se obtuvo acuerdo en el 48% de ellos, sí se obtuvo acuerdo en un 31%, y el 21% restante fue desestimado por incomparecencia u otros motivos. A un año y medio de vigencia de la Ley, es necesario evaluar su impacto en la demora y congestión de los tribunales, cuantificar su costo y el tiempo real que representa para el sistema y para las partes en conflicto, y la calidad y cantidad de sus resultados.
- 1.21 Entre los problemas detectados preliminarmente están los siguientes: (i) baja retribución a los mediadores (incentivos); (ii) alto porcentaje de incomparecencia de las partes en conflicto; (iii) dificultades en notificar a las partes; (iv) heterogeneidad en la capacitación de mediadores; y (v) requisito obligatorio de asistencia letrada y obligatoriedad de que el mediador sea abogado.

^{5/} El régimen se apoya principalmente en una extensa nómina de mediadores (2.100), que son abogados con una antigüedad de título no menor de dos años, cuya licencia es otorgada por el Ministerio.

- 1.22 La mediación comunitaria se viene realizando en la ciudad de Buenos Aires, por centros dependientes del Ministerio de Justicia Nacional o del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El Ministerio cuenta con nueve centros de mediación comunitaria que vienen operando desde 1990, y que a la fecha han procesado 14.000 casos, con una tasa de acuerdo del 60%. El programa de mediación comunitaria del Gobierno de la Ciudad inició sus operaciones en mayo de 1997 y desarrolla sus actividades en once centros integrados de gestión comunitaria. Se prevé un aumento de cinco centros de gestión adicionales. A diferencia de los centros de mediación del Ministerio de Justicia donde los mediadores reciben honorario, los de la Ciudad de Buenos Aires son ad-honorem.

c. Los sistemas de información y las políticas de prevención del delito

- 1.23 La Dirección Nacional de Política Criminal (DNPC) del Ministerio de Justicia, entidad rectora a nivel nacional en el tema, pese a haber realizado algunos estudios sobre actividad delincuencia en varias ciudades del país y en la Capital Federal, no cuenta con sistemas de información e investigación consolidados que permitan generar conocimiento y formular planes de prevención.
- 1.24 La información sobre la ocurrencia de delitos obtenida de las fuentes consultadas, la policía y los expedientes judiciales, presentan discrepancias dada la existencia de criterios distintos de clasificación del delito. La información estadística no se captura y difunde con la frecuencia necesaria y es de baja confiabilidad, lo que dificulta la toma de decisiones. En el interior del país, muchas de estas estadísticas no existen. En vista de las falencias de esta información, no ha sido posible para la DNPC formular una política criminal efectiva, dada la multicasualidad de la violencia y sus diversos y complejos determinantes.
- 1.25 El gobierno considera importante crear un sistema de información para establecer estrategias y políticas de prevención, iniciando el trabajo de relevamiento en las cinco zonas del país que presentan los niveles más altos de violencia urbana (la Capital Federal, el Gran Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Tucumán), antes de consolidar el sistema a nivel nacional.

d. El acceso a la justicia para los procesados y condenados

- 1.26 El Servicio Penitenciario Federal (SPF) que depende de la Subsecretaría de Gestión Penitenciaria y Readaptación Social (SGPRS) del Ministerio de Justicia, es la instancia a nivel federal responsable de la custodia y guarda de los procesados y de la ejecución de las sanciones penales privativas de libertad. Al mes de agosto de 1997, el total de reclusos del sistema penitenciario federal ascendía a 6.126.
- 1.27 La principal limitación detectada en el SPF es el elevado número de reclusos y la inadecuada e insuficiente comunicación entre las unidades carcelarias, la Dirección Nacional y los juzgados. Desde

la perspectiva del acceso a la justicia, la carencia de mecanismos y sistemas de información y de comunicación ágiles, genera que la recepción de testimonio de sentencia y de cómputo definitivo de las penas se retrase entre seis y ocho meses, con lo que el detenido debe permanecer privado de libertad innecesariamente. Solamente la demora en la recepción de los informes de solamente los juzgados de ejecución de la Capital Federal, impacta aproximadamente al 45% de los reclusos.

e. La defensa judicial del Estado

- 1.28 La Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) es la instancia encargada de velar por la representación de los intereses de la Nación en los procesos judiciales en la que es parte demandante o demandada. La PTN administrativa y presupuestariamente está integrada al Ministerio de Justicia, aunque cuenta con autonomía técnica. La PTN coordina el accionar de los servicios jurídicos permanentes de la Administración Pública Nacional, tanto centralizados como descentralizados.
- 1.29 La cartera de juicios del Estado, a junio de 1997, está integrada por 219.000 casos en los que el Estado actúa como demandado por un monto estimado de US\$15.800 millones y por 479.000 casos en los que el Estado es demandante por un monto estimado de US\$15.500 millones. Si a este monto se le agregan los juicios que no tienen un valor monetario determinado, se estima que el pasivo potencial se podría incrementar en US\$20.000 millones adicionales.
- 1.30 En los últimos años, el registro y control de juicios ha mejorado sustancialmente. El apoyo de una donación del gobierno de Japón (1994) permitió desarrollar sistemas de información para mejorar el conocimiento de la situación de los juicios (tanto en los distintos servicios jurídicos como en aquellos de particular importancia económica) y aumentar la capacidad de auditoría de la PTN.
- 1.31 No obstante los avances logrados, dado el elevado número de casos en la cartera de juicios del Estado, la PTN presenta problemas en sus dos ámbitos de acción: la relación y control de los servicios jurídicos descentralizados y la gestión interna. En el primer ámbito, la PTN no cuenta con sistemas modernos de información en red que permitan el control integrado de juicios y la articulación de los distintos servicios. La transferencia de información se hace vía diskette, el proceso de carga es lento y engorroso y la interfase no es amigable con el usuario. El sistema es una aplicación DOS y no integrable con procesadores de texto. Este conjunto de atributos del sistema ha provocado resistencias en el cuerpo de abogados. Además, menos del 3% de los servicios jurídicos utilizan redes para enviar su información de juicios. Hacia el interior de la PTN, la Procuración no cuenta con sistemas integrados y modernos para la elaboración, seguimiento, control y auditoría de expedientes, dictámenes y sumarios. Finalmente, tanto interna como externamente, el equipamiento se encuentra desactualizado tecnológica y funcionalmente.

f. Los Poderes Judiciales a Nivel Provincial

- 1.32 En 1994, y para aunar esfuerzos en el mejoramiento de la justicia provincial, se creó la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas (Junta). La Junta posee personería jurídica y está compuesta por 21 Cortes y Superiores Tribunales de Justicia. La Junta ha suscrito acuerdos de cooperación a nivel nacional (poderes judicial, legislativo y ejecutivo nacional ^{6/}), y a nivel internacional con el National Center For State Courts, el Federal Judicial Center de los Estados Unidos y con otros Tribunales y Cortes de Justicia de América Latina.
- 1.33 Con anterioridad a la creación de la Junta, y con la asistencia de USAID, se creó, en 1992, el Centro de Estudios Judiciales de la República Argentina (CEJURA), adscrito a la Fundación La Ley, destinado a brindar apoyo técnico a la justicia provincial. ^{7/} Solamente once Cortes Provinciales suscribieron convenios bilaterales con el CEJURA. En 1996 se discontinuó este proyecto al cerrar USAID sus operaciones en Argentina y no estar contemplado un mecanismo financiero alternativo ni la estructura institucional que le diera continuidad.
- 1.34 Es necesario apoyar los mecanismos institucionales de coordinación para mejorar la administración de la justicia a nivel provincial. La Junta, pese a la buena disposición de sus miembros, ha visto sus actividades limitadas por la carencia de mecanismos técnicos de comunicación y de difusión interprovincial y de recursos financieros que faciliten el intercambio de experiencias, el estudio de problemas comunes y el desarrollo de actividades de capacitación. Se considera que, dado el poder de convocatoria y la participación activa de sus miembros, la Junta constituye el instrumento más efectivo para promover cambios y difundir prácticas exitosas, maximizando el uso de los recursos, razón por la que se ha propuesto crear, en su estructura, el Instituto para el Mejoramiento de la Justicia Provincial (IMJP).

g. El ordenamiento normativo

- 1.35 A nivel nacional existen aproximadamente 25.000 leyes aprobadas. Muchas de éstas han introducido cambios no siempre ordenados y consolidados, contribuyendo a la "inseguridad jurídica". La abundante legislación existente dificulta la administración de justicia impidiendo su aplicación uniforme. La legislación que ha sido derogada explícitamente está identificada. Sin embargo, la práctica de la derogación implícita ("derógase toda otra norma que se oponga a la presente") compromete la vigencia parcial o total de las normas, al no conocerse con certeza su validez.

^{6/} Para apoyar los esfuerzos destinados a modernizar la justicia provincial, el Gobierno Nacional firmó, en 1996, un acuerdo con la Junta, denominado Declaración Federal de la Rioja. Esta declaración enfatiza la necesidad de la cooperación y coordinación entre los poderes públicos, sin que ello signifique afectar la independencia de la justicia provincial.

^{7/} El CEJURA realizó tareas tales como: la publicación de estudios comparados, encuestas de opinión sobre administración de justicia, y creación de un banco de datos de personal y entidades vinculadas a la justicia, entre otras.

- 1.36 La Dirección de Bases de Datos Jurídicas del Ministerio de Justicia conformó, en 1981, un sistema de información consolidado de consulta de documentos jurídicos, denominado Sistema Argentino de Informática Jurídica (SAIJ). Este sistema se ha ido modernizando operativa y tecnológicamente con asistencia del Gobierno Italiano (1981) y posteriormente del Banco Mundial (1992). 8/
- 1.37 Dado que se cuenta con la información organizada, sistematizada, actualizada y editada de la normativa jurídica, corresponde en esta etapa depurar la legislación vigente asegurando que se cumplan con los requisitos de: (i) validez (asegurando que todas las normas se fundamentan en otra superior); (ii) efectividad (garantizando el tránsito de la norma general a la normativa individual concreta); (iii) vigencia (clarificando la situación normada y la fecha de su entrada en vigor); (iv) interpretación (asegurando la conceptualización del caso concreto); y (v) seguridad. Complementariamente a este ejercicio de depuración, es importante mejorar la calidad de las nuevas disposiciones jurídicas, que permita minimizar las ambigüedades de los enunciados normativos, a través de la elaboración y difusión de un manual de técnicas legislativas.

4. La estrategia para avanzar en el proceso de reforma judicial

- 1.38 La reforma del sistema de justicia es entendida por las autoridades nacionales como una condición necesaria para asegurar el crecimiento y el desarrollo económico sostenido del país. La falta de regularidad, eficiencia y eficacia de los mecanismos de aplicación del derecho son identificados como elementos que vulneran la seguridad jurídica y comprometen el crecimiento económico. Por ello, se postula que toda reforma del sector debe incluir acciones tendientes a fortalecer la seguridad jurídica para garantizar que el orden vigente será mantenido, las leyes sean conocidas y sólo se apliquen a conductas posteriores a su vigencia, a la vez que sean claras y respetadas por quienes están investidos de las facultades para hacerlas cumplir.
- 1.39 En este contexto, se concibe a la reforma del sistema de justicia como un proceso continuo de transformación y modernización de las entidades que lo conforman, a fin de garantizar el Estado de Derecho. La estrategia propuesta ha identificado acciones específicas y puntuales que puedan ejecutarse en el corto plazo con resultados inmediatos, y acciones cuyo impacto tomaría un mayor tiempo de maduración. Para avanzar en la implementación de esta estrategia e iniciar el proceso de reforma, se ha decidido avanzar

8/ La base de datos a disposición en el SAIJ contiene los archivos de: (i) toda la legislación Nacional de carácter general y objetivamente vigente (3.389 leyes, decretos-leyes y tratados internacionales publicados por el Boletín Oficial); (ii) la legislación nacional reducida (22.978 referencias a leyes sin texto completos); (iii) legislación nacional derogada (1378 leyes con texto completo); (iv) legislación provincial vigente con legislación de las provincias que se han adherido al sistema; (v) legislación provincial reducida y derogada; (vi) decretos nacionales (3902 decretos vigentes de alcance general y ordenado desde el año 1975); (vii) jurisprudencia; (viii) dictámenes de la Procuración del Tesoro de la Nación; (ix) doctrina (resúmenes de los artículos jurídicos publicados en revistas especializadas de mayor circulación; y (x) normativa compatibilizada entre los países del MERCOSUR.

con una operación que permita abordar áreas problema específicas a fin de generar un efecto visible en la ciudadanía sobre la efectividad de los cambios introducidos y permitir, al mismo tiempo, crear las bases operativas y de coordinación necesarias para una operación posterior de mayor envergadura.

- 1.40 El proceso de identificación de las áreas problema en las entidades que integran el sistema de justicia nacional y la priorización de aquellas específicas fue realizado como resultado de un diagnóstico a nivel de cada entidad ^{9/}. Este proceso fue desarrollado en un esfuerzo conjunto entre las autoridades participantes del sistema y el Banco, el cual financió una operación de cooperación técnica con la que se pusieron a disposición de las entidades los servicios de consultoría especializada para apoyar los trabajos.
- 1.41 Las actividades incluidas en el Programa propuesto cumplen con cuatro o más de los siguientes criterios de selección: (i) contribuir a impulsar la implantación de la Reforma Constitucional de 1994; (ii) tener carácter demostrativo; (iii) ser replicables; (iv) no requerir de aprobación de ley para su ejecución; (v) tener una inmediata utilidad en el ámbito federal y eventual aplicabilidad en el ámbito provincial; (vi) ser acotadas y medibles con criterios de éxito e indicadores de referencia; (vii) ser sostenibles financieramente; y (viii) tener el compromiso institucional para su desarrollo por parte de la entidad beneficiaria en el marco de su competencia.

B. Participación y experiencia del Banco

1. Participación del Banco

- 1.42 La estrategia operativa para la acción del Banco en Argentina indica como prioritarias las actividades que se enmarquen en las siguiente tres áreas básicas: (i) profundizar y consolidar la **modernización del Estado**; (ii) **reducir la pobreza y elevar la calidad de vida de la población**; y (iii) **elevar la productividad y la competitividad de la producción nacional**. El Programa propuesto en este documento se enmarca dentro de esta estrategia, ya que el mismo permitiría avanzar en el proceso de apoyo a la reforma y modernización del Estado, específicamente del sistema de justicia.
- 1.43 La participación del Banco en el financiamiento del Programa propuesto permitirá impulsar una primera iniciativa de acción conjunta de reforma del sector justicia a nivel nacional donde participarán distintas entidades de los Poderes del Estado, de manera coordinada, pero con la independencia que corresponda. De esta manera se aseguraría una visión integral del proceso y un desarrollo institucional paralelo en el proceso de reforma del sector. Asimismo, se permitirá difundir las mejores prácticas

^{9/} Si bien se dispone de la información respectiva a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), no se realizó el ejercicio en esta entidad dado que el Banco Mundial está apoyando una operación específicamente en esta esfera. En el caso del Consejo de la Magistratura tampoco se pudo avanzar dado que no existe operativamente; sin embargo, se incluyó en el ejercicio a la Junta Federal de Cortes que participaría en el Programa.

incorporadas en el sector a nivel de los poderes judiciales provinciales, contando para ello con un componente específico.

2. Experiencia del Banco

- 1.44 A la fecha, el Banco no ha financiado en Argentina operaciones de apoyo a programas de reforma judicial. El Programa de Apoyo a la Reforma Integral de la Provincia de Mendoza (AR-0209), en negociación, sería la primera operación del Banco que incluye un componente de apoyo al Poder Judicial Provincial. El mencionado programa busca fortalecer la Suprema Corte de Justicia Provincial y mejorar la calidad y cobertura de los servicios judiciales provinciales. Se espera que el Banco siga avanzando en el apoyo al Sector a nivel de cada provincia. No obstante, y pese a que el presente Programa sería casi en su totalidad destinado a fortalecer el sistema de justicia nacional, se ha incluido un componente a ser ejecutado por la Junta Federal de Cortes y Tribunales Superiores de Justicia para permitir la diseminación de mejores prácticas y adelantos a introducirse a nivel de la justicia nacional.

C. Participación y Experiencia de Otras Entidades

- 1.45 **El Banco Mundial** financió un diagnóstico descriptivo sobre la administración de justicia tanto federal como provincial, identificando los principales problemas del sistema, los cuales coinciden con los enumerados anteriormente ^{10/}, no habiendo participado en el financiamiento de préstamos en el sector justicia en el país. Para 1998, el BIRF ha incorporado una operación que apoyaría la ejecución de experiencias piloto para agilizar el tratamiento de causas fiscales en el marco de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). El programa piloto abarcaría a tres Juzgados Nacionales (Mar del Plata, Resistencia y de Seguridad Social en la Capital Federal) y tendría un costo estimado de US\$5 millones. El Equipo de Proyecto del Banco ha coordinado sus acciones con el Equipo del BIRF asegurando su complementaridad.
- 1.46 **USAID**, desde 1989 hasta 1995, apoyó el proceso de modernización del sistema de justicia argentino mediante actividades asociadas a la construcción de consensos, la reforma de códigos, la introducción de sistemas alternativos de resolución de conflictos, y la capacitación judicial. La experiencia de USAID tanto en Argentina como en otros países, sugiere la conveniencia de una aproximación gradual y selectiva a la reforma judicial ^{11/}.

^{10/} Terzano, M. y consultores.: Reforma de la Administración de Justicia, IDF-Grant, Informe Final, 4 tomos, Buenos Aires, 1994.

^{11/} Blair, H. and Hansen, G.: Weighing in on the Scales of Justice, Strategic Approaches for Donor-Supported Rule of Law Programs, USAID Program and Operations Assessment Report No.7, USAID, 1994

II. EL PROGRAMA

A. Objetivo

- 2.1 El objetivo es apoyar el proceso de reforma del sistema de justicia, mediante el financiamiento de proyectos de carácter puntual y catalítico, que pudieran ser replicables, para apoyar el proceso de cambio y modernización del sector justicia. Estos proyectos contribuirían al desarrollo de un sistema de justicia más confiable e independiente que sea eficiente y accesible.

B. Metas

- 2.2 Las principales metas del Programa son: (i) contar con un sistema de registro y control de juicios para los 108 servicios jurídicos y 30 delegaciones en el interior, instalado y operativo vía Internet al final del segundo año; (ii) aumentar en 30% anual el número de acciones ejercidas por el Ministerio Público Fiscal ante los tribunales; (iii) disponer de los resultados de la aplicación de la mediación prejudicial obligatoria (debilidades y fortalezas), al final del segundo año, con las recomendaciones para proponer ajustes al régimen; (iv) incrementar el total de la oferta de la defensa y asesoría pública en un 70% en 4 años; (v) contar con un documento estratégico anual durante 4 años, sobre prevención del delito para las cinco zonas urbanas de mayores índices de delincuencia del país (Capital Federal, Gran Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Tucumán) para su difusión; (vi) reducir los tiempos de recepción de los testimonios de sentencia y en el computo definitivo de las penas, en 4 años, de 8 meses a 30 días; (vii) realizar y difundir mejores prácticas en administración de justicia y de experiencias modelo a nivel de la justicia provincial; y (viii) disponer de un digesto ordenado con toda la legislación nacional vigente para consulta en el SAIJ en el tercer año.

C. Descripción

- 2.3 Para el logro del objetivo y metas del Programa, se apoyarían actividades agrupadas en tres subprogramas: (i) protección jurídica; (ii) apoyo al diseño y ejecución de políticas preventivas del delito y de acceso a la justicia; y (iii) justicia provincial y ordenamiento normativo. ^{12/}

1. Protección jurídica (US\$4.311.000)

- 2.4 El subprograma incluiría dos componentes: (i) fortalecimiento de la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN); y (ii) fortalecimiento del Ministerio Público Fiscal (MPF).

^{12/}Los términos de referencia para los servicios de consultoría, las especificaciones técnicas para los bienes, y el detalle de los costos y financiamiento por categoría de inversión, se encuentran disponibles en los archivos técnicos del Programa.

a. Fortalecimiento de la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) (US\$1.530.000).

- 2.5 El objetivo del componente es fortalecer la capacidad de defensa del Estado en juicio mediante la modernización de los mecanismos de gestión y control de la cartera de juicios del Estado y la capacitación del personal de la PTN y del Cuerpo de Abogados.
- 2.6 El componente incluiría el desarrollo de: (i) un sistema integrado de gestión de los servicios jurídicos; y (ii) un sistema de información interno de la PTN.
- 2.7 El sistema integrado de los servicios jurídicos incluye: (i) la modernización del sistema de registro y control de juicios (modificación de la solución, su traslado a nueva plataforma, la ampliación de cobertura, desarrollo de la nueva plataforma, y mantenimiento de la solución); (ii) la capacitación en los sistemas a implantar incluyendo un "aula digital"; (iii) la red de comunicaciones (vía Internet) con los servicios jurídicos descentralizados; y (iv) el equipamiento computacional (hardware, software, periféricos) requerido para las oficinas de los servicios jurídicos.
- 2.8 El desarrollo de los sistemas internos de la PTN incluye: (i) el rediseño (reingeniería) de los procesos; (ii) el desarrollo de la red interna de la PTN (diseño y cableado de red, provisión de hardware, aplicaciones de oficina); y (iii) el desarrollo de aplicaciones específicas de las diversas áreas de la PTN (dictámenes, proceso de sumarios, administración interna, seguimiento interno de expedientes, control de biblioteca).

b. Fortalecimiento del Ministerio Público Fiscal (MPF) (US\$2.781.000).

- 2.9 El objetivo del componente es fortalecer la capacidad del MPF en la defensa de los intereses de la sociedad ante los órganos jurisdiccionales.
- 2.10 El componente incluiría: (i) desarrollo normativo; (ii) fortalecimiento de la gestión administrativo-financiera y de personal; (iii) desarrollo e instalación de sistemas de información; y (iv) capacitación.
- 2.11 El desarrollo normativo incluye, apoyo para la reglamentación de: el régimen de carrera, el disciplinario y el de enjuiciamiento de los fiscales; el régimen de reemplazo y de licencia; y el reglamento de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas (FNIA).
- 2.12 El fortalecimiento de la gestión administrativa-financiera incluirá: (i) el relevamiento de la estructura existente; (ii) la definición de alternativas de diseño de modelos organizacionales, incluyendo alternativas de contratación con terceros; (iii) una propuesta de organigrama funcional de la Dirección General de Administración Financiera (DGAF) y del personal requerido; (iv) el

desarrollo de un plan de cuentas para el sistema integrado de administración de presupuesto; (v) la elaboración de los perfiles de cargos y jerarquías requeridos; y (vi) el desarrollo de los manuales correspondientes. En el área de recursos humanos se adelantarán las siguientes acciones: (i) el relevamiento de la estructura existente; (ii) la definición de alternativas de diseño de modelos organizaciones; (iii) una propuesta de organigrama funcional y esquema de organización interna del área; (ii) una propuesta de reingeniería de procesos internos; (iv) la elaboración de perfiles de cargos y jerarquías; (v) el apoyo al diseño de políticas de personal; y (vi) la elaboración de manuales de personal.

- 2.13 El desarrollo e instalación de sistemas de información incluiría: (i) sistemas de información para las áreas de administración financiera y presupuesto, y de recursos humanos; (ii) un sistema de seguimiento de expedientes; (iii) un sistema de informática jurídica (dictámenes); (iv) un sistema de información gerencial para el seguimiento de la calidad del servicio de la entidad; y (v) la adquisición del equipamiento informático complementario al existente en la institución.

- 2.14 La capacitación incluiría: (i) el fortalecimiento del centro de capacitación incluyendo el diseño de planes de estudio; y (ii) la realización de cursos específicos (derecho procesal penal, derechos humanos, sistemas de investigación de delitos y nuevas formas de delincuencia).

2. Apoyo al diseño y ejecución de políticas preventivas del delito y de acceso a la justicia (US\$6.232.000)

- 2.15 El subprograma incorporaría cuatro componentes: (i) mediación; (ii) defensoría pública; (iii) formulación de políticas de prevención del delito; y (iv) informatización del servicio penitenciario.

a. Mediación (US\$284.000)

- 2.16 El componente tiene como objetivo evaluar el desarrollo de la mediación como método alternativo de resolución de conflictos.

- 2.17 El componente, a ser ejecutado por el Ministerio de Justicia (por medio de la Dirección Nacional de Métodos Alternativos de Resolución de Controversias), incluiría la evaluación completa de la experiencia de mediación obligatoria establecida en 1995 (Ley 24.573); y la evaluación de la experiencia de mediación comunitaria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

- 2.18 La evaluación de la experiencia de mediación prejudicial obligatoria incluiría: (i) análisis de los resultados de la mediación 13/; (ii) estudio del régimen de la Ley y su

13/ Este análisis incluiría el número y frecuencia de los casos, duración, resultados, costo y financiamiento del sistema, incentivos y nivel de satisfacción de mediadores, abogados y partes, efectos sobre la tasa de justicia, financiamiento del sistema, efectos en trámite y tiempos judiciales, nivel de cumplimiento voluntario de acuerdos, efectos sobre la mediación privada sustitutiva, y un relevamiento de los servicios privados de mediación.

reglamentación, incluyendo una evaluación de la obligatoriedad de la asistencia letrada en el proceso y que el mediador sea abogado; (iii) estudios de la capacitación de mediadores, contenidos mínimos y niveles de capacitación, y evaluación de las entidades capacitadoras; (iv) opiniones de usuarios; y (v) formulación y realización de un programa de formación de capacitadores de mediadores.

- 2.19 La evaluación de la mediación comunitaria incluiría: (i) análisis del programa de mediación comunitaria, en especial de la mediación escolar; (ii) diseño de un programa de capacitación comunitaria; y (iii) capacitación de capacitadores en mediación comunitaria.

b. Defensoría pública (US\$2.752.000)

- 2.20 El componente tiene como objetivo mejorar la defensa de los derechos y el acceso a la justicia de los sectores de población de menores ingresos.
- 2.21 El componente incluiría: (i) fortalecimiento institucional y técnico de la Defensoría; (ii) desarrollo e instalación de sistemas de información; y (iii) capacitación del personal profesional y administrativo.
- 2.22 Las actividades de fortalecimiento institucional y técnico incluirían: (i) la reforma de la estructura actual, incluyendo la creación de nuevos departamentos (apoyo técnico-pericial, estadísticas, superintendencia penitenciaria), la modificación de las estructuras de capacitación y de informática, y la creación de una instancia de coordinación superior (Consejo de Coordinación Institucional); (ii) la elaboración de manuales de organización, de funciones, de procedimientos administrativos, financieros y de personal ^{14/}; (iii) la elaboración de un digesto que incluya el relevamiento de la normativa, dictámenes y resoluciones internas vigentes relevantes a la Defensoría, propuestas de modificación y consolidación del marco legal y reglamentario.
- 2.23 El desarrollo e instalación de sistemas de información incluiría: (i) el fortalecimiento del departamento de informática ampliando su campo de acción a la administración de la red local, dándole atribuciones para el apoyo a todos los recursos informáticos de la institución, supervisando la capacitación en el tema y creando los "escritorios de ayuda (help desks)" a nivel nacional; (ii) el desarrollo e instalación de sistemas de control y gestión gerencial (incluyendo aspectos administrativos, financieros y de personal y sistemas gerenciales -Executive Information Systems), (iii) el desarrollo e implantación de un sistema descentralizado de seguimiento de causas que reemplace los actuales libros de registro de expedientes y que incluya la consulta de los datos básicos de cada causa, a los eventos y al vencimiento de plazos procesales; (iv) la adquisición de equipamiento (servidores, redes locales,

^{14/} Se ha identificado la necesidad de los siguientes manuales: mesa de entrada, suministros, contrataciones, patrimonio, mantenimiento, presupuesto, tesorería, contaduría, pagos, liquidaciones; selección, ingreso, y control de la carrera, y de sanciones y remociones.

software y comunicaciones) para la dirección, el aparato administrativo y las defensorías. Se estima que al finalizar la ejecución del proyecto se contará con redes en el 25% de las defensorías y computadores individuales en el resto.

- 2.24 Las actividades de capacitación incluirían la realización de: (i) 10 talleres de inducción al cambio, focalizados hacia la sistematización de procesos y de control de gestión, dirigidos a 160 defensores; (ii) un curso anual (denominado "curso del defensor", dirigido a 20 defensores cada uno en temas técnicos; 3 cursos (total) dirigidos a los defensores ante la Corte Suprema; 10 cursos y 4 talleres de actualización para los defensores del interior del país; y 5 cursos destinados a los defensores de la Capital; y (iii) el diseño e implantación de un sistema de capacitación a distancia a partir del segundo año. El Programa financiará, asimismo, los requerimientos de consultoría necesarios para la realización de las actividades de capacitación.

c. Formulación de políticas de prevención del delito
(US\$2.454.000)

- 2.25 El componente tiene como objetivo fortalecer los sistemas de información necesarios para el diseño y ejecución de políticas y programas de prevención del delito.
- 2.26 El componente contemplaría: (i) fortalecimiento de la capacidad técnica de la Dirección Nacional de Política Criminal (DNPC); (ii) apoyo al diseño e implantación de sistemas de información para la prevención del delito; y (iii) equipamiento.
- 2.27 El fortalecimiento de la DNPC incluiría apoyo de consultoría especializada para mejorar: (i) la capacidad de formulación de políticas de prevención del delito; y (ii) el análisis de información estadística y el perfeccionamiento de los sistemas de manejo y control de calidad de esta información. Este apoyo incluiría la capacitación del personal de la Dirección en sistemas de información, estadísticas y criminología.
- 2.28 El desarrollo e implantación de sistemas de información pretende, a partir de la captura oportuna de datos sobre la delincuencia urbana, producir líneas estratégicas de prevención. Para este efecto se realizarían encuestas de victimización, de actitudes, el relevamiento de causas judiciales y el establecimiento de un sistema de alerta temprana. Las encuestas de victimización, de actitudes y el relevamiento de la información judicial se realizarán en las cinco zonas que presentan los niveles más altos de violencia urbana en el país (Capital Federal, Gran Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Tucumán). Este conjunto de instrumentos se articularán con sistemas de información geográficos.
- 2.29 Las encuestas de victimización permitirán dimensionar la franja de delitos no denunciados y su calificación, difundir esta información, al gobierno, la policía, los medios, organismos no gubernamentales y la comunidad, y contribuir a que la toma de decisiones tenga una base de datos con fundamento científico. Se

realizaría una encuesta anual durante tres años, con una muestra de 7.800 casos.

- 2.30 La encuesta de actitudes y comportamientos frente a la violencia seguiría la metodología OPS (encuesta ACTIVA), a la cual se incorporarán preguntas sobre violencia doméstica. Con esta encuesta se identificarían patrones de actitudes y comportamientos sobre los delitos y la violencia, para que puedan incorporarse en los programas preventivos. Se realizará una encuesta al inicio del Programa, en las cinco ciudades arriba mencionadas, con una muestra de 2.700 personas.
- 2.31 El relevamiento completo de causas judiciales permitirá contar con una base de información confiable sobre los principales delitos denunciados ante los juzgados (principalmente homicidios dolosos y culposos, robos con arma y consumo y tráfico de estupefacientes) y cuya tendencia preocupa a las autoridades. Se prevé la realización de un total de dos relevamientos de esta naturaleza.
- 2.32 El establecimiento de un sistema de alerta y análisis temprano permitiría contar con información oportuna, confiable y sistemática sobre la ocurrencia de hechos que producen la muerte a personas en homicidios dolosos, y accidentes de tránsito. Se realizará un mapeo periódico sobre estos hechos y se utilizará esta información para la toma de decisiones y la difusión de los resultados. El financiamiento incluye recursos para la implantación de los sistemas requeridos (equipamiento informático y software).

d. Informatización del servicio penitenciario (US\$742.000)

- 2.33 El componente tiene como objetivo facilitar el acceso a la justicia de la población procesada o condenada, a través del desarrollo de sistemas de información que permitan la observancia de las garantías y derechos de los internos y el control de los tiempos de reclusión.
- 2.34 Las actividades que serían desarrolladas por la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios y Adaptación del Ministerio de Justicia, incluirían la mejora en la gestión judicial y penitenciaria con el equipamiento y desarrollo del software necesario.
- 2.35 La mejora en la gestión judicial incluirá el diseño e implantación de sistemas de información relativos a la situación de los internos que pueda ser requerida por jueces, fiscales y defensores. El sistema incluiría información oportuna sobre la situación legal de las causas, las principales fechas y eventos del proceso (vencimiento de penas, cambios en la legislación que afecten su aplicación, libertad condicional), el tipo de delito, los procesos pendientes, la jurisdicción de cada caso, la situación de traslados y la progresión del régimen de reclusión. El sistema incluirá, además, el desarrollo de instrumentos de alerta temprana de las circunstancias que determinan los cambios de situación del interno, para asegurar el cumplimiento de los términos legales. Finalmente el sistema permitiría impulsar una actitud proactiva en la obtención de la información por parte de los juzgados, mejorando

las comunicaciones y favoreciendo la interacción con los mismos. En el componente se incluyen actividades de capacitación destinadas a la correcta implantación y manejo de los sistemas arriba señalados y el equipamiento computacional y desarrollo de software requeridos.

- 2.36 El sistema de información permitirá también el seguimiento sanitario de los internos portadores de enfermedades de manejo complejo para garantizar el acceso a la salud de internos y agentes penitenciarios. La correcta gestión del recurso humano resulta imprescindible para la eficaz administración del tratamiento penitenciario.

3. Justicia provincial y ordenamiento normativo (US\$4.292.000)

- 2.37 Este subprograma incluiría dos componentes: (i) mejoramiento de la justicia provincial; y (ii) digesto ordenado.

a. Mejoramiento de la justicia provincial (US\$2.264.000).

- 2.38 El objetivo de este componente es apoyar la modernización de la administración de la justicia en las provincias.
- 2.39 El componente, a ser desarrollado por la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas (Junta), incluiría además del apoyo a la creación del Instituto para el Mejoramiento de la Justicia Provincial (IMJP) en el seno de la Junta ^{15/}, las siguientes actividades: (i) capacitación; (ii) difusión de mejores prácticas y experiencias modelo; y (iii) estudios.
- 2.40 Las actividades de capacitación, que también serán asumidas por el Instituto con carácter permanente una vez finalizada la ejecución del componente, incluyen la realización de: (i) asistencia técnica a las escuelas judiciales mediante visitas periódicas de consultoría especializada; (ii) la realización de cinco seminarios de actualización legislativa por año, en cada una de las cinco cabeceras regionales, dirigidos a personal judicial; (iii) la capacitación de peritos y auxiliares de la justicia en la sede de la Junta, en 15 áreas especializadas por año; (iv) dos cursos anuales de perfeccionamiento en temas de alto impacto social (protección al medio ambiente, a la mujer y a las minorías étnicas) dirigidos a jueces de los tribunales miembros de la Junta; y (v) el financiamiento del material didáctico y de difusión requeridos para las actividades de capacitación.
- 2.41 Las actividades de difusión de mejores prácticas y de experiencias modelo para la justicia provincial se adelantarían en las siguientes áreas: (i) el desarrollo de modelos de códigos de ética para los sistemas de justicia provincial; (ii) la promoción del

^{15/} Dado que los gastos de creación y operación del IMJP se relacionan al financiamiento del personal que conformará la estructura del Instituto, el mismo que apoyará la ejecución de las actividades descrita en este componente, se ha considerado más adecuado considerar estos costos como gastos de ejecución del Programa; no obstante, serían asumidos por el IMJP una vez terminada la operación.

acceso a la justicia, incluyendo estudios de factibilidad para el establecimiento de jurisdicciones de menor cuantía, el mejoramiento de los juzgados de paz y la definición de alternativas para la organización de los sistemas de defensa pública; (iii) administración de la justicia, que comprende la elaboración de propuestas de reestructuración de las áreas administrativas, financieras y de recursos humanos; el diseño de modelos de organización y funcionamiento de juzgados y su aplicación en una experiencia piloto; la elaboración de sistemas de seguridad modelo para el manejo y control de expedientes, documentos y pruebas, y la preparación de criterios para la selección y control de peritos y auxiliares de la justicia; (iv) estadística, que incluye el relevamiento de las necesidades mínimas de información estadística en cada una de las jurisdicciones, el diseño de un software modelo común y básico, y la definición de estándares de rendimiento y productividad judicial; (v) congestión y mora judicial, que incluye el análisis de la tipificación de la mora judicial en las provincias, el establecimiento de recomendaciones y el desarrollo de una experiencia piloto en la materia; y (vi) informática, que incluye el relevamiento de las necesidades de informatización de las cortes, el análisis de alternativas de comunicación entre ellas, el diseño de un modelo común para el seguimiento de causas judiciales (case flow management) a nivel de juzgado y el desarrollo de una base de datos de peritos judiciales.

2.42 Para incentivar la adopción de mejores prácticas, el Programa financiará premios regionales anuales que se otorgarán a la excelencia judicial para los juzgados que apliquen con mayor éxito alguno de los modelos arriba señalados. Estos premios serán administrados por la Junta y otorgados de acuerdo al reglamento a ser definido por la misma.

2.43 El componente incluye la realización de los siguientes estudios: (i) estudio de factibilidad para la creación de una escuela judicial federal para las cortes provinciales u otras alternativas de capacitación; (ii) encuestas a los usuarios directos del sistema sobre el funcionamiento de la justicia provincial; (iii) estudio sobre las necesidades de informatización de la Junta; y (iv) desarrollo de pliegos de licitación y términos de referencia detallados para contratación de firmas consultoras.

b. Digesto Ordenado (US\$2.028.000)

2.44 El objetivo del componente es contribuir a la seguridad jurídica mediante el establecimiento de un Digesto Legislativo que contenga de manera ordenada, clasificada y consolidada la legislación nacional (aproximadamente 25.000 leyes).

2.45 El componente, a ser desarrollado por la Secretaría de Asuntos Legislativos con la participación de la Dirección de Bases de Datos Jurídicas y de la Dirección Nacional del Registro Oficial del Ministerio de Justicia, incluiría: (i) la instalación de grupos de trabajo integrados por personas físicas y jurídicas en cada una de

las áreas temáticas identificadas 16/; (ii) la confección del índice temático básico; (iii) la recopilación y clasificación de la normativa, incluyendo la selección de la jurisprudencia y doctrina pertinente; (iv) el análisis epistemológico y de la validez de la información, incluyendo derogaciones implícitas, carencias, colisiones normativas, contradicciones etc.; (v) el análisis de los códigos de fondo; (vi) la unificación de textos; (vii) la realización de dos talleres-seminario de discusión sobre los resultados; (viii) el desarrollo de un manual de técnica legislativa; (ix) la edición del digesto y del manual en CD ROM; y (x) la elaboración de las bases de datos en línea, sobre la base de la información existente en el SAIJ.

4. Gastos de Ejecución (US\$3.246.000)

- 2.46 Los gastos de ejecución se relacionan a: (i) la contratación de los servicios de consultoría y adquisición del equipamiento mínimo necesario para constituir la Unidad Ejecutora Central del Programa (UEC), en el Ministerio de Justicia, cuya responsabilidad será de coordinar y administrar la ejecución de la operación; y (ii) el financiamiento de los servicios de consultoría de apoyo a las Unidades Ejecutoras Sectoriales (UES) a constituirse para ejecutar los componentes fuera de la órbita del Ministerio.
- 2.47 Se financiarán como gastos de ejecución el equipo que integrará la UEC, compuesto por cinco consultores de acuerdo a los términos de referencia acordados para cada uno de los integrantes, los mismos que se encuentran disponibles en los archivos técnicos del Programa (¶ 3.12 y 3.13).
- 2.48 Para apoyar la ejecución de los componentes en las entidades externas al Ministerio de Justicia, se ha identificado en el análisis, la necesidad de apoyar las UES respectivas, con servicios de consultoría complementarios al personal con el que disponen, asegurando que cada uno de los componentes se ejecuta eficientemente. Por lo tanto, para el componente de fortalecimiento del MPF se contratarían los servicios de consultoría de tres consultores y para el componente de defensoría pública (MPD) de cuatro consultores (¶ 3.15).
- 2.49 En el caso específico de la Junta, dado que se estaría apoyando la creación y funcionamiento del Instituto para el Mejoramiento de la Justicia Provincial (IMJP), se ha considerado para fines del Programa como gasto de ejecución a los tres consultores que constituirían la estructura del Instituto (¶ 3.15 y 4.34).

D. Costo y Modalidades de Financiamiento

- 2.50 El costo total de Programa alcanzaría a US\$21 millones, de los que el Banco financiaría US\$10,5 millones y la contrapartida local

16/ Las áreas temáticas preliminarmente identificadas son: trabajo y seguridad social, salud y acción social, educación y cultura, recursos naturales, industria y comercio, obras y servicios públicos, interior y defensa, justicia y asuntos constitucionales, comercio exterior y tributario y finanzas. Esta taxonomía podrá modificarse de acuerdo a las conclusiones que arroje la elaboración del Índice Temático Básico.

US\$10,5 millones, provenientes de recursos del Presupuesto General de la Nación. El cuadro siguiente resume los costos del Programa y su fuente de financiamiento por componentes, en miles de dólares:

COSTOS ESTIMADO DEL PROGRAMA

SUBPROGRAMAS	EJECUTOR	Total por Fondo (en miles de US\$)			
		BID	C. Local	Total	% Total
1.0 PROTECCION JURIDICA		2.156	2.155	4.311	20,5
1.1 Procuración Tesoro Nación	Min. Justicia	765	765	1.530	7,3
1.2 Ministerio Público Fiscal	MPF	1.391	1.390	2.781	13,2
2.0 POLITICAS PREVENTIVAS DELITO Y ACCESO JUSTICIA		3.116	3.116	6.232	29,7
2.1 Mediación	Min. Justicia	142	142	284	1,3
2.2 Defensoría Pública	MPD	1.376	1.376	2.752	13,1
2.3 Formulación Política Prevención Delito	Min. Justicia	1.227	1.227	2.454	11,7
2.4 Informatización Servicio Penitenciario	Min. Justicia	371	371	742	3,6
3.0 JUSTICIA PROVINCIAL Y ORDENAMIENTO NORMATIVO		2.379	1.913	4.292	20,4
3.1 Justicia Provincial	Junta	1.365	899	2.264	10,8
3.2 Digesto Ordenado	Min. Justicia	1.014	1.014	2.028	9,6
4.0 GASTOS DE EJECUCION		1.695	1.551	3.246	15,5
4.1 Unidad Ejecutora Central (UEC)	Min. Justicia	792	648	1.440	6,9
4.2 Unidades Ejecutoras Sectoriales					
- UES: Ministerio Publico Fiscal	MPF	288	288	576	2,7
- UES: Defensoría Pública	MPD	312	312	624	3,0
- UES: Justicia Provincial	Junta	303	303	606	2,9
5.0 IMPREVISTOS		1.049	5	1.054	5,0
6.0 COSTOS FINANCIEROS		105	1.760	1.865	8,9
- Intereses					
- Comisión de crédito			1.635	1.635	
- FIV			125	125	
		105		105	
Totales		10.500	10.500	21.000	100,0
% Fondo/Programa		50,0	50,0	100,0	

2.51 La contribución del Banco al proyecto (US\$10,5 millones) será cargada a la ventanilla dólar del Capital Ordinario (OC) de acuerdo a las condiciones descritas en el recuadro.

Fuente:	OC
Monto:	US\$10,5 millones
Periodo de amortización:	20 años
Periodo de gracia:	4 años
Periodo de desembolsos:	4 años
Interés:	Variable
FIV:	1% del préstamo
Comisión de crédito:	0,75% sobre saldos no desemb.

III. EJECUCION DEL PROGRAMA

A. El prestatario y el ejecutor

- 3.1 El Ejecutor general del Programa será el Ministerio de Justicia de la Nación, a través de una Unidad Ejecutora Central (UEC), dependiente de la Secretaría de Asuntos Legislativos. Además de este Ministerio, actuarán como ejecutores directos, en el marco de sus competencias y con la autonomía e independencia que corresponda; la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), el Ministerio Público Fiscal (MPF), el Ministerio Público de la Defensa (MPD), y la Junta Federal de Cortes y Tribunales Superiores de Justicia de las Provincias Argentinas.

B. Los Ejecutores

1. El Ministerio de Justicia

- 3.2 Por parte del Ministerio de Justicia participarán en la ejecución del Programa: La Secretaría de Asuntos Técnicos y Legislativos (como responsable de la UEC, del componente de Digesto Ordenado y de la coordinación institucional); la Subsecretaría de Gestión Penitenciaria y Readaptación Social (como responsable del componente de informatización del servicio penitenciario); la Dirección Nacional de Política Criminal (como responsable del componente de formulación de políticas de prevención del delito); y la Dirección Nacional de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos (como responsable del componente de mediación). Todas las adquisiciones y contratos respectivos a cada componente dentro del Ministerio se llevarán a cabo por la UEC. La supervisión técnica, aprobación de los servicios recibidos, conformidad con los bienes adquiridos y el seguimiento de las actividades, serán responsabilidad de cada dependencia del Ministerio donde se desarrollan las actividades correspondientes.

2. La Procuración del Tesoro de la Nación (PTN)

- 3.3 La PTN será responsable de la ejecución del componente de fortalecimiento de la Procuración del Tesoro de la Nación, no obstante, todas las adquisiciones y contratos respectivos al componente de la PTN serán llevados a cabo por la UEC. Para el desarrollo de las actividades señaladas, se integrará un equipo de trabajo con funcionarios de la PTN que dependerá del Procurador del Tesoro, asistido por dos Sub-Procuradores, cinco Direcciones Nacionales (Dictámenes, Asuntos Judiciales y Fiscales, Sumarios, Auditoría, Coordinación Técnica y Administrativa), y la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado (ECAE). El personal de planta de la PTN está integrado por 215 funcionarios (135 son abogados y 80 administrativos), y el Cuerpo de Abogados del Estado (CAE) asciende a 3.000.

3. El Ministerio Público Fiscal (MPF)

- 3.4 El MPF será responsable de la ejecución del componente de fortalecimiento del MPF. Para este fin, el Procurador General ha delegado a la Procuradora Fiscal ante la CSJ la dirección del personal que integrará la UES a constituirse en el MPF. La organización administrativa del MPF para el desarrollo de sus funciones incluye: (i) la Oficina del Procurador General de la Nación; (ii) los cuatro procuradores fiscales (derecho público, derecho privado, y dos de derecho penal); (iii) la oficina del Ministerio Público; (iv) la secretaría de coordinación; (v) la secretaría del centro de estudios y capacitación; (vi) la oficina del coordinador de procuradores adjuntos; y (vii) la secretaría de administración, finanzas y recursos humanos y dos direcciones (administración y recursos humanos). Para el desarrollo de sus funciones, la Fiscalía dispone de 300 Fiscales en la Capital Federal, 180 Fiscales en el interior del país, y cuenta con el apoyo directo de 1.300 profesionales y 620 empleados administrativos y de servicios generales.

4. El Ministerio Público de la Defensa (MPD)

- 3.5 El MPD será responsable de la ejecución del componente de defensoría pública. Para este fin, se constituirá una UES dependiente del Defensor General de la Nación. La organización administrativa del MPD se divide en 6 áreas principales: (i) la Oficina del Defensor General de la Nación; (ii) la Secretaría de Superintendencia y Gestión; (iii) la Secretaría de Asuntos Jurídicos y Relaciones Institucionales; (iv) la Defensoría ante la Cámara de Casación Penal; (v) la Defensoría ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación; (vi) las Defensorías de Capital Federal; y (vii) las Defensorías del Interior del País. Para el desarrollo de sus funciones el MPD dispone de 735 funcionarios: 168 Defensores Oficiales; 4 Magistrados; 14 Funcionarios; y 450 empleados. La dotación de recursos humanos está distribuida entre las 149 Defensorías y 12 Asesorías que participan a nivel de la Justicia Nacional o de la ciudad de Buenos Aires (55 Defensorías y 12 Asesorías); de la Justicia Federal de la Capital (7 Defensorías); y de la Justicia Federal del interior del país (87 Defensorías).

5. La Junta Federal de Cortes

- 3.6 La Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas (Junta), será responsable de la ejecución del componente para el mejoramiento de la justicia provincial. Para este fin, se constituirá una UES que dependerá de la Comisión Directiva de la Junta. La Junta posee personería jurídica y está integrada por 21 Cortes y Tribunales provinciales. Sus objetivos son: preservar y consolidar la independencia de los Poderes Judiciales Provinciales; coordinar el intercambio de experiencias, información e ideas; auspiciar y organizar la realización de seminarios, conferencias, cursos y reuniones; promover la publicación de trabajos y la difusión de información específica que contribuya al perfeccionamiento de sus integrantes, entre otros.

- 3.7 La Junta está estructurada por: (i) la Asamblea, que es el órgano jerárquico más alto, teniendo a su cargo el tratamiento de los aspectos de trascendencia institucional; y (ii) la Comisión Directiva que ejerce la representación de la Junta haciendo cumplir las resoluciones de la Asamblea.

C. Estrategia de implementación

- 3.8 El mecanismo de ejecución propuesto, toma en cuenta el hecho de que el Programa abarcará áreas de competencia correspondientes a distintas entidades del sistema judicial. Dada la importancia que tiene la independencia de acción en los ámbitos jurisdiccionales de cada entidad participante, se ha diseñado un esquema de ejecución que permitirá una coordinación ágil y eficiente, a la vez que respete las prerrogativas de cada entidad para ejecutar directamente su respectivo componente. El esquema propuesto evita sujetar las decisiones de cualquiera de los ejecutores a una unidad central, manteniendo al mismo tiempo un solo canal como interlocutor del Banco.
- 3.9 Para definir el mecanismo de ejecución del Programa se han tomado en cuenta criterios de simplicidad y transparencia procurando asegurar la eficiencia de su funcionamiento.

D. Organización para la Ejecución

- 3.10 La ejecución del Programa prevé la constitución de una Unidad Ejecutora Central (UEC) que funcionará en el Ministerio de Justicia, ^{17/} y tres Unidades Ejecutoras Sectoriales (UES), responsables de la ejecución de las actividades en su jurisdicción (MPF, MPD, y la Junta). Como condición previa al primer desembolso correspondiente a los componentes de las entidades participantes fuera de la órbita del Ministerio de Justicia, se deberá presentar constancia de haber firmado un convenio subsidiario de participación suscrito entre el Ministerio de Justicia y cada entidad, incluyendo una cláusula compromisoria para dirimir los conflictos que puedan suscitarse (en los archivos técnicos del Programa se encuentra a disposición el modelo de convenio subsidiario).

1. Unidad Ejecutora Central (UEC)

- 3.11 La UEC será responsable de la administración del Programa, sirviendo de nexo entre las UES y el Banco. La UEC estará adscrita a la Secretaría de Asuntos Técnicos y Legislativos del Ministerio de Justicia de la Nación.
- 3.12 Las funciones principales de la UEC serán: (i) apoyar el cumplimiento de todas las condiciones previas al primer desembolso del eventual préstamo; (ii) apoyar la ejecución de los componentes

^{17/} El Ministerio de Justicia tiene experiencia en la ejecución de otros proyectos con financiamiento externo tales como: reconversión técnica y administrativa del SAIJ (con el BIRF), el Programa de control de juicios contra el Estado (donación del Japón); estudio del Estado de la Justicia Federal en la Nación Argentina (donación BIRF); y programa de capacitación de jueces y docentes universitarios sobre oralidad en materia no penal, entre otros.

dentro de la esfera del Ministerio de Justicia (fortalecimiento de la Procuración del Tesoro de la Nación, mediación, formulación de políticas de prevención del delito, informatización del servicio penitenciario, y digesto ordenado); (iii) apoyar la preparación y la subscripción de los convenios subsidiarios de participación de las entidades fuera de la órbita del Ministerio de Justicia en el Programa (MPF, MPD y la Junta); (iv) brindar apoyo administrativo y supervisión a los procesos llevados a cabo por las UES a constituirse en las entidades externas al Ministerio para asegurar que el Programa se ejecute dentro de las normas acordadas entre el BID y el Gobierno Nacional (Ministerio de Justicia); y (v) realizar los pagos solicitados por las UES para adquirir los bienes y servicios previstos en sus respectivos componentes.

- 3.13 Para el cumplimiento de sus funciones la UEC estará integrada por: un Director General, un Asistente Ejecutivo, un Jefe de Unidad Operativa y de Coordinación de Adquisiciones, un Jefe de Unidad Administrativa y Financiera, y un Asistente Contable, además de dos secretarías. Como condición previa al Primer desembolso del Programa se deberá presentar constancia de la contratación del personal que integrará la UEC.

2. Unidades Ejecutoras Sectoriales (UES)

- 3.14 En todas las entidades participantes en el Programa fuera de la jurisdicción del Ministerio de Justicia se constituirá una UES. La estructura y dotación de personal en las UES se han dimensionado en cada caso tomando en consideración las actividades a realizarse y las necesidades de complementar el personal existente y disponible en cada entidad.
- 3.15 En el caso del MPF se contratará un Gerente de Proyecto, un asistente financiero y un asistente jurídico y de control de adquisiciones. En el MPD se contratará un Coordinador General del componente, uno para el área de sistemas e informática y uno para el área de capacitación, asistidos por un asistente administrativo. Finalmente, en el caso de la Junta, se contratará un coordinador ejecutivo, un jefe de unidad operativa, y un jefe de unidad administrativo-financiera.
- 3.16 Como condición previa al primer desembolso de los componentes a ser ejecutados por estas unidades, se deberá presentar constancia de la contratación del personal que integrará la UES respectiva.

E. Procedimientos Operativos

- 3.17 La ejecución de las distintas actividades del Programa se realizará conforme a la estrategia de implementación señalada. Toda contratación de servicios de consultoría y la adquisición de bienes necesarios para el desarrollo de cada componente del Programa responderán a los términos de referencia o especificaciones técnicas definidas para cada componente del Programa.
- 3.18 Para el desarrollo de las actividades del Programa cada UES será responsable de la ejecución de su respectivo componente para lo

cual deberá: (i) definir y desarrollar los Planes Anuales Operativos (PAO); (ii) preparar, convocar, seleccionar y adjudicar las licitaciones y concursos conforme a las normas y procedimientos del Banco; (iii) remitir a la UEC toda la documentación del proceso de licitación desarrollado; (iv) aprobar los informes de los servicios de consultoría y preparar los informes de seguimiento; y (v) solicitar los pagos correspondientes a la UEC por los bienes y servicios recibidos, manifestando su acuerdo con las labores realizadas.

- 3.19 La UEC a su vez deberá: (i) recibir y consolidar los PAO para el Programa en su conjunto, consolidación que deberá remitir al Banco; (ii) revisar los procedimientos seguidos por las UES en los procesos de convocatoria, selección y adjudicación de los sujetos de las licitaciones y concursos a fin de remitir dicha información y solicitar la no objeción del Banco al proceso; (iii) preparar los contratos para adquirir los bienes o servicios correspondientes después de la no objeción del Banco y remitirlo para su firma a la autoridad correspondiente dentro del Ministerio de Justicia; (iv) revisar las solicitudes de desembolso recibidas de las UES; (v) solicitar los desembolsos al Banco; (vi) efectuar los pagos correspondientes; y (vii) remitir al Banco los informes de seguimiento y de auditoría del Programa.
- 3.20 Los PAO a ser desarrollados por cada UES así como el PAO consolidado a ser elaborado por la UEC para el Programa deberán ser presentados al Banco dentro de los 60 días antes de finalizado cada año calendario y consistirá en un informe, plan de actividades para el año calendario, que incluirá: la proyección del número de actividades a realizarse, los objetivos y metas programáticas para el período; el cronograma de ejecución de las actividades previstas; y las necesidades de financiamiento para el período, señalando los hitos más importantes para los logros de los objetivos perseguidos. Como condición previa al primer desembolso del Programa la UEC deberá presentar el PAO correspondiente a los componentes a ser ejecutados en la órbita del Ministerio de Justicia (fortalecimiento de la PTN, mediación, formulación de políticas de prevención del delito, informatización del servicio penitenciario y digesto ordenado). Asimismo, como condición previa para cada componente fuera de la órbita del Ministerio cada UES deberá presentar su respectivo PAO.

F. Evaluación y Control

- 3.21 Para el seguimiento y evaluación del Programa se tomará en cuenta los indicadores de éxito definidos en el Marco Lógico para el Programa. Asimismo, se deberá evaluar el cumplimiento de las metas establecidas en los PAO individuales y en el PAO consolidado. En el Anexo III-1 se acompaña el Marco Lógico.

1. Inspección y supervisión

- 3.22 El seguimiento de cada componente estará a cargo de la UES respectiva y la supervisión general del Programa será realizada por la UEC con base a los planes anuales elaborados por cada

subprograma, para lo que efectuarán reuniones periódicas de seguimiento y evaluación, con base en los informes que sobre el particular presentarán las entidades ejecutoras sectoriales con la debida anticipación.

- 3.23 A lo largo del período de ejecución y en los 60 días siguientes a la terminación del período, se presentará un informe de avance semestral. El informe incluirá una descripción de los progresos alcanzados en relación al PAO, y los resultados obtenidos en los indicadores de desempeño del Programa, la explicación de los desvíos frente a los puntos de referencia establecidos, y eventuales ajustes a la planificación del semestre siguiente. Adicionalmente y en forma de anexo, se deberá incluir los informes de avance semestrales presentados por las UES.
- 3.24 Adicionalmente, se propone que el Banco realice una evaluación intermedia después del cuarto semestre de iniciado el Programa para medir los resultados alcanzados y definir la programación de operaciones hasta la conclusión del Programa. Como resultado de esta evaluación se podrá reasignar, de ser necesario, recursos entre los subprogramas.

2. Auditoría y control

- 3.25 La reposición de fondos después del primer anticipo, estará sujeta a la rendición de cuentas de la UEC que llevará sus registros en base al plan de cuentas aprobado por el BID como condición previa al primer desembolso.
- 3.26 Durante el período de ejecución del Programa, el prestatario presentará anualmente los estados financieros auditados del Programa, dentro de los 120 días contados a partir de la fecha de cierre del ejercicio. Los estados financieros serían auditados por la Auditoría General de la Nación (AGN).

3. Evaluación ex-post

- 3.27 De conformidad con las políticas del Banco, se consultó con el prestatario el interés de que se financie la evaluación ex-post del Programa, posibilidad que fue desestimada. El Equipo de Proyecto, dadas las características particulares y novedosas de la operación, consultó a la Oficina de Evaluación del Banco (EVO) la posibilidad de contar con su apoyo para dicha evaluación, habiendo accedido. Para la evaluación propuesta se tomarían en cuenta los indicadores de éxito y seguimiento contenidos en el Marco Lógico.

G. Adquisiciones

- 3.28 Toda selección y contratación de servicios y las adquisiciones de equipos y materiales previstos por el proyecto deberán efectuarse siguiendo los procedimientos del Banco. En el caso que el monto de adquisiciones de bienes exceda el equivalente a US\$350.000 y cuando el monto de los contratos de los servicios de consultoría supere los US\$200.000, tales licitaciones y/o concursos deberán efectuarse a nivel internacional. Las licitaciones por montos

inferiores a estos límites procederán de acuerdo a la legislación nacional. En el Programa no se prevé el financiamiento de obras.

H. Reconocimiento de gastos y financiamiento retroactivo

- 3.29 Con posterioridad a la misión de análisis las autoridades del Ministerio de Justicia solicitaron al Banco reconozca con cargo a la contrapartida local hasta el equivalente de US\$65.000, y adicionalmente prevea el financiamiento retroactivo (reembolso de gastos) de hasta US\$65.000 contra los recursos del financiamiento del Banco. Los gastos serían incurridos en constituir la UEC del Programa, a partir del 1 de noviembre de 1997 y hasta que se apruebe el financiamiento por parte del Banco. Dado que las adquisiciones de servicios correspondientes se realizarán de acuerdo a los términos de referencia y especificaciones acordadas con las autoridades durante la misión de análisis, y que se seguirán los procedimientos del Banco para las adquisiciones correspondientes, el Equipo de Proyecto recomienda que estos gastos sean reconocidos. En ambos casos, la solicitud se encuentra dentro los plazos que el Banco establece para permitir el reconocimiento y el reembolso de gastos.

I. Fondo Rotatorio

- 3.30 Para la ejecución del Programa se constituirá un fondo rotatorio con hasta el 5% de los recursos del financiamiento, luego del cumplimiento de las condiciones previas establecidas como requisito al primer desembolso. A tal efecto, se abrirá una cuenta especial en el Banco de la Nación Argentina donde se depositarán los fondos para el Programa. Dicho fondo podrá ser renovado en igual porcentaje conforme se vayan realizando las actividades y justificando los gastos a satisfacción del Banco. Se tendrá flexibilidad en la asignación de los recursos para cada componente, a fin de apoyar una adecuada ejecución de las actividades programadas.

J. Período de ejecución y cronograma de desembolsos

- 3.31 El período de ejecución del programa será de cuatro años contados a partir de la fecha de vigencia del contrato de préstamo. El cronograma de desembolsos por componentes se muestra a continuación, el calendario de licitaciones se acompaña como Anexo III-2.

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO POR SUBPROGRAMA	TOTAL	Año de Ejecución			
		1	2	3	4
PROTECCION JURIDICA	4.311	962	2.018	1.148	183
- BID	2.156	481	1.009	574	92
- Contraparte	2.155	481	1.009	574	91
POLITICAS PREVENTIVAS Y ACCESO A LA JUSTICIA	6.232	1.216	2.888	1.346	782
- BID	3.116	608	1.444	673	391
- Contraparte	3.116	608	1.444	673	391
JUSTICIA PROVINCIAL Y ORDENAMIENTO NORMATIVO	4.292	1.310	1.712	947	323
- BID	2.379	716	916	525	222
- Contraparte	1.913	594	796	422	101
GASTOS DE EJECUCION	3.246	812	812	812	810
- BID	1.695	424	424	424	423
- Contraparte	1.551	388	388	388	387
GASTOS FINANCIEROS	1.865	172	390	592	711
- BID	105	26	26	26	27
- Contraparte	1.760	146	364	566	684
IMPREVISTOS	1.054	213	314	313	212
- BID	1.049	213	312	312	212
- Contraparte	5	2	2	1	-
TOTAL	21.000	4.687	8.134	5.158	3.021
- BID	10.500	2.468	4.131	2.534	1.367
- Contraparte	10.500	2.219	4.003	2.624	1.654

IV. BENEFICIOS, RIESGOS Y VIABILIDAD DEL PROGRAMA

A. Beneficios

1. Beneficios del Programa en su conjunto

- 4.1 Como resultado del Programa se: (i) fortalecería el sistema de defensa de los intereses del Estado y de la sociedad; (ii) desarrollaría la mediación como medio alternativo para la resolución de conflictos; (iii) daría mayor acceso a los sectores de población de bajos ingresos con servicios de defensa pública fortalecidos; (iv) formularían y aplicarían políticas preventivas del delito; (v) facilitaría a la población penitenciaria el acceso a la justicia; (vi) apoyaría la coordinación de iniciativas e intercambio de experiencias a nivel de las Cortes Provinciales a fin de promover la adopción de mejores prácticas en el sector; (vii) contribuirá al ordenamiento normativo a fin de garantizar el Estado de Derecho; y (viii) fortalecería el ordenamiento jurídico para asegurar el Estado de Derecho.
- 4.2 El Programa propuesto debe reducir los costos de transacción asociados a los procesos judiciales mediante las siguientes vías: (i) aumento de la "oferta" a través de la introducción de nuevos esquemas de gerencia y administración en la Fiscalía y Defensoría y el fortalecimiento de las Cortes Provinciales; y (ii) reducción de la "demanda", por medio del fortalecimiento de los sistemas de resolución alternativa de conflictos, y la ejecución de políticas de prevención de delito. Finalmente, la mejora de los sistemas de defensa de los intereses públicos deberá representar mejoras en la capacidad estatal de recuperación y defensa de ingresos fiscales.

2. Beneficios de los componentes

a. Protección jurídica

- 4.3 **Fortalecimiento de la PTN.** Los principales beneficios de este componente son: (i) mejorar el control de los juicios del Estado. Si esta mejor gestión redundara en una recuperación del 0.1% de la cartera, el ahorro sería equivalente a US\$ 35 millones; (ii) mejorar la eficiencia del trabajo de los abogados del Estado, dando una mayor capacidad al servicio; (iii) reducir las demoras e ineficiencias en la comunicación y traspaso de información entre los servicios jurídicos y la PTN; y (iv) mejorar la calidad de la labor de la institución mediante la capacitación.
- 4.4 **Fortalecimiento del MPF.** La implantación en la Fiscalía de mejores sistemas administrativos y de información y de actividades de capacitación permitirá: (i) mejorar la eficacia y calidad del trabajo del Procurador General y de los fiscales a los distintos niveles; (ii) facilitar la integración y mejorar la comunicación al interior de la entidad; y (iii) tener un seguimiento más directo de los casos.

b. Apoyo al diseño y ejecución de políticas preventivas y de acceso a la justicia

- 4.5 **Mediación.** La mediación tiene grandes beneficios: se descongestionan los tribunales, se mejora el acceso a la justicia y la calidad de las soluciones, y se obtiene un mayor grado de satisfacción de las partes. Dado que el componente se limita a la evaluación de la efectividad de la mediación obligatoria y de la mediación comunitaria, los principales beneficios consisten en conocer, con información fidedigna, la efectividad de la ley de mediación obligatoria, y su impacto real sobre costos, tiempos y actores; y el impacto de los centros de mediación comunitaria de la ciudad de Buenos Aires.
- 4.6 **Defensoría pública.** El principal beneficio del componente es la mejora en el acceso a la justicia de la población más pobre mediante el aumento de la eficiencia y eficacia de la institución. Este beneficio se lograría a través del aumento y mejora de la oferta de servicios de defensa (en un 70% en tres años) que se brinda a través de los 160 defensores oficiales.
- 4.7 La implantación de mejores sistemas administrativos y de información, permitirá: (i) reducir la carga administrativa del Defensor (actualmente 40% del tiempo); (ii) mejorar la calidad de la defensa al tener acceso a mejores fuentes de información; (iii) posibilitar una mayor integración entre los diferentes fueros; (iv) mayor eficiencia, seguridad y transparencia en los sistemas administrativos al reducir la transcripción manual de información, la duplicidad de tareas y la duplicación de archivos y registros; y (v) tener un seguimiento más directo de casos mediante indicadores de gestión tales como tiempos de procesos y volúmenes operativos. Además, se incorporarían actividades específicas de capacitación para atender casos relacionados con problemas de violencia doméstica y la temática de la defensa de los derechos de poblaciones indígenas.
- 4.8 **Formulación de políticas de prevención del delito.** Este componente permitirá disponer de información altamente confiable sobre las causas y tendencias de los principales delitos en la Argentina. El disponer de esta información, permitirá diseñar políticas de prevención focalizadas que lleven a reducciones de las tasas de delincuencia. Es importante señalar que en aquellos sitios donde la política de prevención se ha basado en información epidemiológica-delictual, ésta ha sido focalizada y ha estado acompañada de reducciones importantes en el delito. Tal es el caso de la ciudad de Nueva York o de Cali, en Colombia. El diseño del componente estuvo a cargo de uno de los responsables de este tipo de políticas en esta última ciudad.
- 4.9 **Informatización del servicio penitenciario.** El principal beneficio del apoyo al servicio penitenciario hace referencia al mejoramiento del cumplimiento de las garantías procesales de imputados y condenados, reduciendo el tiempo de comunicación entre juzgados, la Dirección y las unidades operativas.

c. Justicia provincial y ordenamiento normativo

- 4.10 **Mejoramiento de la justicia provincial.** El principal beneficio de este componente se refiere a la creación de un mecanismo de información y comunicación interprovincial para difundir las mejores prácticas en esos tribunales. Este mecanismo permitirá, crear "economías de escala" al contar con diseños "tipo" para áreas técnicas comunes tales como sistemas de información y estadísticas y administración judicial. Adicionalmente, mediante la introducción de premios a la excelencia a las mejores prácticas judiciales, se introducen incentivos positivos a la modernización de la justicia provincial. Este tipo de instituciones ha sido altamente exitosa en otros países de estructura federal. Tal es el caso del "National Center for State Courts" de los Estados Unidos.
- 4.11 **Digesto ordenado.** La modernización del Digesto permitirá avanzar hacia una mejora cualitativa importante de la información contenida en las bases de datos del SAIJ. Con el compendio ordenado, depurado, armonizado y actualizado de toda la legislación nacional se lograría: (i) brindar un conocimiento claro de la legislación realmente vigente, mejorando el conocimiento del derecho apuntalando el sistema democrático; (ii) contribuir a reducir las ambigüedades de los enunciados normativos; (iii) afianzar la seguridad jurídica y, en consecuencia, ofrecer una mejor perspectiva para las operaciones comerciales y las inversiones nacionales y extranjeras; (iv) mejorar la calidad del accionar del Poder Ejecutivo; (v) dotar al Parlamento de una herramienta técnica de ayuda para la producción de normas ajustadas al derecho; y (vi) asegurar la correcta aplicación de la ley en los procesos judiciales y mejorar su eficiencia, evitando dispendiosos procesos de recopilación de información en la preparación de los fallos.

B. Riesgos

1. Riesgos del Programa en su conjunto

- 4.12 El Programa en su conjunto es institucionalmente complejo ya que participarán cinco instituciones distintas: Ministerio de Justicia, Procuración del Tesoro (la cual, sin embargo utilizará a la UEC para todo el procesamiento de adquisiciones), Fiscalía, Defensoría y Junta Federal de Cortes.
- 4.13 Para minimizar este riesgo, el esquema de ejecución se basa en tres principios estratégicos. Primero, asegurar la homogeneidad de criterios en la ejecución mediante la suscripción de convenios interagenciales. Se ha previsto que estos convenios contengan una cláusula compromisoria en la que las entidades se obligan a nombrar de mutuo acuerdo un árbitro, cuya dictamen sea de cumplimiento obligatorio. Segundo, asegurar la total independencia funcional de las entidades, otorgándole a las UES todas las atribuciones decisorias en la selección y control de las adquisiciones. En esos casos, UEC actuaría como unidad de caja y de suscripción de contratos, garantizando, adicionalmente, el cumplimiento de los procedimientos del Banco. Además se ha asegurado que no existan condicionalidades cruzadas. Tercero, dotar a las UES y a la UEC con

profesionales de un alto perfil en las áreas operativas. En el caso de la UEC se ha previsto la contratación de al menos un experto de alto nivel con experiencia en adquisiciones con organismos de crédito internacional. Asimismo, se prevé que antes de iniciar la ejecución, el Banco dará entrenamiento en sus procedimientos a las entidades participantes.

2. Riesgos de los componentes

a. Protección jurídica

- 4.14 **Fortalecimiento de la PTN.** El principal riesgo del componente consiste en lograr el compromiso por parte de los servicios jurídicos del Estado con los objetivos del Proyecto. Para mitigar este riesgo, el componente tiene el pleno compromiso no solamente de la PTN sino del ejecutivo nacional y se cuenta con recursos de capacitación e informática para los servicios.
- 4.15 **Fortalecimiento del MPF.** El principal riesgo para el componente de la Fiscalía está asociado, al igual que en la Defensoría, a su capacidad institucional. Para minimizar este riesgo, se ha dedicado más del 13% de los recursos del financiamiento a apoyar y coordinar la ejecución, y se cuenta con un componente equivalente al 15% de los recursos destinados al fortalecimiento institucional.

b. Apoyo al diseño y ejecución de políticas preventivas y de acceso a la justicia

- 4.16 **Mediación.** La evaluación de la mediación prejudicial obligatoria deberá producir recomendaciones técnicas y de cambio legislativo en la Ley. Es facultad del Poder Ejecutivo elevar estas propuestas, cuando corresponda, ante el Parlamento y de éste tramitar y acoger las recomendaciones, las cuales podrían sufrir modificaciones no previstas.
- 4.17 **Defensoría pública.** La Defensoría, a pesar de su antigüedad, es una institución débil institucionalmente, lo que obliga a un esquema de ejecución que incluya la contratación de tres consultores dedicados a la coordinación de actividades en las diferentes áreas. Por otro lado, dada la dispersión geográfica de las defensorías individuales es importante asegurar la adopción de los nuevos procedimientos por parte de ellas. Para este efecto, más del 25% de los recursos están destinados a la capacitación de defensores.
- 4.18 **Formulación de políticas de prevención del delito.** El relevamiento de información judicial, depende del acceso ágil a los juzgados de ejecución de penas. En las actividades previstas se han incluido visitas previas y periódicas a cada uno de los juzgados involucrados y se prevé diseñar los sistemas teniendo en cuenta a los jueces y funcionarios judiciales y entregarles los programas correspondientes.
- 4.19 **Informatización del servicio penitenciario.** Las Unidades penitenciarias se hallan dispersas por el territorio nacional, lo que dificultará la adecuada comunicación de los avances del

proyecto. Los sistemas a ser implantados han incorporado actividades de capacitación de los funcionarios a través de seminarios y talleres.

c. Justicia provincial y ordenamiento normativo

- 4.20 **Mejoramiento de la justicia provincial.** La Junta Federal de Cortes es un organismo colegiado, y ninguno de sus miembros reside en Buenos Aires, ciudad en la cual se instalará el Instituto. A pesar de esta situación, durante la preparación del proyecto los miembros de la Junta se reunieron periódicamente y no sólo avalaron formalmente el diseño del programa sino que participaron activamente en su formulación. El programa refleja las iniciativas presentadas por los tribunales miembros, las cuales ya han sido aprobadas por la Junta Directiva.
- 4.21 **Digesto ordenado.** El principal riesgo de este componente consiste en la posible dispersión del trabajo de las comisiones, si este trabajo fuera ejecutado con sólo consultores individuales. Dado que no existen experiencias de esta naturaleza, el Gobierno Argentino ha solicitado que se considere otorgar flexibilidad a este componente para su ejecución combinando la contratación de personas naturales y jurídicas.

C. Viabilidad del Programa

1. Protección jurídica

- 4.22 **Fortalecimiento de la PTN.** La experiencia de los últimos años indica que la PTN ha mostrado una elevada capacidad en el manejo de los casos en que el Estado actúa en juicio. La PTN cuenta con suficiente personal, particularmente en informática, para adelantar las actividades previstas.
- 4.23 **Fortalecimiento del MPF.** El esquema de ejecución previsto, basado en un fuerte énfasis en el apoyo de consultoría especializada, asegura la ejecución del componente y la adecuada transmisión de conocimientos a las estructuras de la institución.

2. Apoyo al diseño y ejecución de políticas preventivas y de acceso a la justicia

- 4.24 **Mediación.** Dado que el componente se limita a la contratación de dos firmas consultoras, este componente no tiene implicaciones institucionales.
- 4.25 **Defensoría pública.** Al igual que en la Fiscalía, el esquema de ejecución previsto, basado en un fuerte énfasis en el apoyo de consultoría especializada, asegura la ejecución del componente y la adecuada transmisión de conocimientos a las estructuras de la institución.
- 4.26 **Formulación de políticas de prevención del delito.** Durante la preparación del componente se pudo constatar que la DNPC cuenta con

el personal y la capacidad necesarias para adelantar las actividades previstas.

- 4.27 **Informatización del servicio penitenciario.** La Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Nacional cuenta con el personal adecuado para asegurar la continuidad en la utilización de los sistemas a ser desarrollados. En particular, su departamento de informática cuenta con áreas altamente capacitadas en la que se han desarrollado una gran cantidad de programas de uso interno. Finalmente, uno de los aspectos subrayados por el consultor contratado para apoyar la preparación del componente es que las autoridades políticas, las de dirección y las líneas operativas describieron, con distintos enfoques, los mismos problemas y plantearon soluciones similares al contenido de esta propuesta.

3. Justicia provincial y ordenamiento normativo

- 4.28 **Mejoramiento de la justicia provincial.** La Junta Federal de Cortes es una institución débil técnicamente. Sin embargo, por primera vez en la historia argentina, este cuerpo colegiado cuenta con la plena participación de 21 Cortes Provinciales, y financia con sus recursos un centro en la Capital Federal con el personal de apoyo requerido. En la actualidad se encuentra organizando la Asamblea Anual, en la que se desarrollará un seminario internacional de ética judicial, con la participación de jueces de Corte Suprema de los Estados Unidos y otros países. Es importante anotar que la Comisión Directiva designó a un grupo compuesto por cuatro presidentes de Cortes Provinciales, el cual estuvo continuamente involucrado en la definición de las actividades a ser financiadas, sosteniendo reuniones periódicas durante el período de preparación.
- 4.29 **Digesto ordenado.** La Dirección de Bases de Datos Jurídicas del Ministerio de Justicia ha construido con su propio personal, con apoyo externo puntual, una de las más importantes bases de datos jurídicas del continente. Hoy el SAIJ, tiene mas de 24.000 leyes en su base, accesibles vía una página Web en Internet. Su alta capacidad técnica se refleja también en que la preparación de las actividades fue realizada totalmente, y sin el apoyo técnico de consultoría especializada, por personal de planta de la institución.

4. Medio ambiente, impacto social y mujer

- 4.30 Dado que las actividades a ser financiadas en el marco del Programa se relacionan con el apoyo de reformas administrativas y el fortalecimiento institucional de entidades del sistema de justicia, la ejecución de la operación no tendría impactos ambientales. No obstante, se ha incorporado como parte del componente de apoyo a la justicia provincial la capacitación a los jueces y magistrados en temas relativos a la aplicación de leyes y reglamentación en materia ambiental.
- 4.31 Conforme a lo estipulado en el documento de la Octava Reposición (AB-1704), se ha determinado que el Programa propuesto no cumple con las características de una operación focalizada hacia los

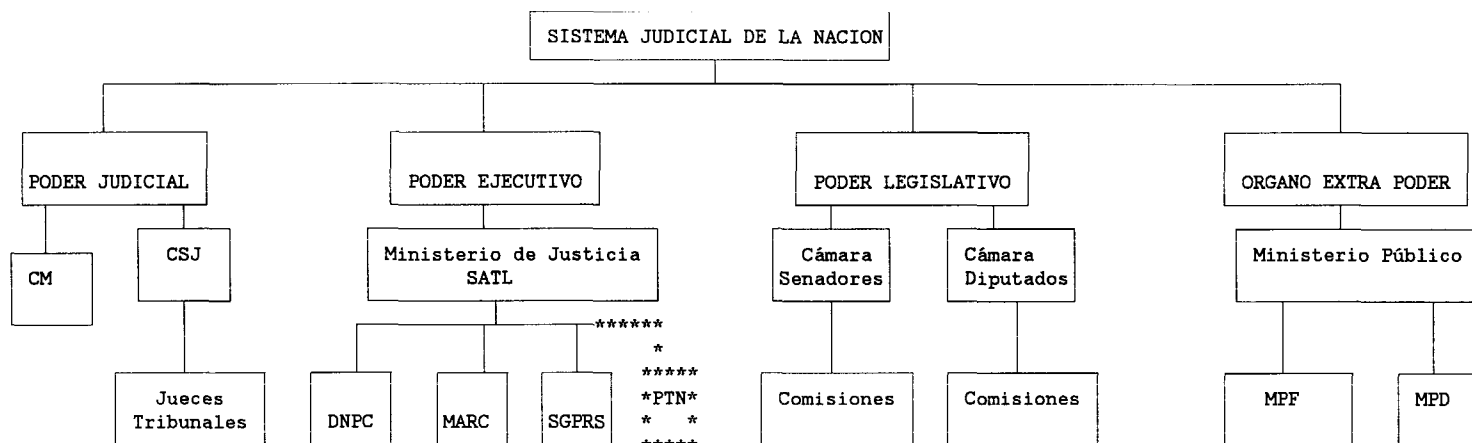
sectores pobres y no se dirige específicamente a la mujer. No obstante, entre las actividades que el programa pretende apoyar se han incorporado aquellas que permitirían mejorar el acceso a la justicia de los sectores más pobres de la población, mediante el aumento y mejora de la oferta de servicios judiciales (70% en tres años) que se brinda a través de los 160 defensores oficiales. En cuanto a la temática de la mujer, se ha incluido en el componente de formulación de políticas de prevención del delito, dentro de la encuesta de actitudes y comportamiento, las preguntas que permitan obtener información para formular políticas de prevención en materia de violencia doméstica (§ 2.30).

- 4.32 El Comité de Medio Ambiente e Impacto Social (CESI) en la reunión del 16 de mayo de 1997, dada la naturaleza de la operación no solicitó la elaboración de un estudio adicional de impacto social y ambiental para el Programa.

D. Sustentabilidad del Programa

- 4.33 La gran mayoría de las actividades del Programa son de carácter puntual y catalítico. Las funciones asignadas a los consultores de largo plazo responden a la necesidad de asegurar la dedicación completa a la ejecución del mismo. Una vez terminadas sus actividades, las responsabilidades de aquellas actividades que tienen un carácter continuo serán asumidas por las entidades participantes que, en todos los casos, menos en el caso de la Junta Federal de Cortes, cuentan con el personal profesional y los recursos para su continuidad.
- 4.34 En el caso de la Junta, el componente ha sido diseñado para que ésta institución asuma progresivamente los costos de operación y recurrentes que serán generados por el IMJP, los que se espera continúen una vez termine la ejecución. El financiamiento de los costos operativos para el funcionamiento del Instituto, serán absorbidos gradualmente por la Junta durante la ejecución para garantizar la sostenibilidad del mismo (25% al segundo año, 75% al tercero y 100% al cuarto año). La Junta deberá asumir además la totalidad de los costos recurrentes una vez finalizado la ejecución del Programa para lo cual deberá incrementar la cuota que pagan sus 21 integrantes en un 100% a partir del tercer año de ejecución, tomando como referencia la cuota del año 1996. En el convenio de participación respectivo a firmarse con el Ministerio de Justicia, se incluirá una cláusula al respecto.

ENTIDADES PARTICIPANTES EN EL SISTEMA DE JUSTICIA NACIONAL



Corte Suprema de Justicia de la Nación, es la máxima autoridad del Poder Judicial
 Consejo de la Magistratura, responsable de la administración de los recursos y de la carrera judicial
 Secretaría de Asuntos Técnicos y Legislativos del Ministerio de Justicia de la Nación, elabora anteproyectos de reforma, de normas reglamentarias y de ordenamiento de normas jurídicas.
 Dirección Nacional de Política Criminal, define políticas y ejecuta programas de prevención del delito
 Dirección Nacional de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos (otorga licencia para mediadores y capacitación)
 Subsecretaría de Gestión Penitenciaria y Readaptación Social, define políticas y ejecuta acciones en el sistema penitenciario federal y readaptación social.
 La Procuración del Tesoro de la Nación tiene jerarquía equivalente a la de Ministerio del Poder Ejecutivo y tiene las funciones principales de: asesorar legalmente al Poder Ejecutivo y representar al Estado en juicio y en los casos sometidos a arbitraje, impartiendo instrucciones que sean necesarias a los representantes fiscales, salvo en caso de intervención del Procurador General de la Nación. En fines presupuestarios la PTN forma parte de la estructura orgánica del Ministerio de Justicia, pero posee independencia técnica.

Existen comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia, de Legislación General y Asuntos Penales, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores.

Es un órgano independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera, que interviene en el sistema judicial para la defensa de los intereses generales de la sociedad. Ejerce sus funciones independientemente y está compuesto por el Ministerio Público Fiscal (MPF) y el Ministerio Público de la Defensa (MPD). Si bien la defensoría y la fiscalía forman parte del Ministerio Público, tienen autonomía para el cumplimiento de sus funciones específicas, sus integrantes son nombrados separadamente y cuentan con inmunidad de arresto. El Ministerio Público Fiscal, tiene como funciones centrales la acción penal pública, la investigación de la conducta administrativa de los agentes de la administración nacional, y el dictamen de la constitucionalidad de algunas causas que se tramitan ante la CSJ. El Ministerio está integrado por el Procurador general de la Nación, los procuradores fiscales, los fiscales ante los tribunales, y la fiscalía de investigaciones administrativas.
 El Ministerio Público de la Defensa, tiene como funciones principales la defensa de los derechos humanos, la promoción y la ejecución de políticas para facilitar el acceso a la justicia y actuar de oficio en la defensa judicial de menores e incapaces.

MATRIZ DE MARCO LOGICO DEL PROGRAMA: APOYO AL PROGRAMA DE REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA (AR-0124)

EN DE OBJETIVOS	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUE
<p>desarrollo de un sistema de able e independiente que sea e.</p> <p>el proceso de reforma del</p>	<p>Apoyo al desarrollo y fortalecimiento de órganos independientes como Fiscalía, Defensoría y Procuración del Tesoro; mejoramiento del conocimiento de la legislación vigente; optimización de procesos en servicios judiciales.</p> <p>Desarrollo de actividades puntuales y catalíticas en las siguientes áreas: (1) <u>fortalecimiento institucional</u>: capacidad de defensa del Estado y de la sociedad fortalecida; (2) <u>acceso a la justicia y la prevención</u>: (i) desarrollo de la mediación como instrumento de resolución alternativa de conflictos, (ii) <u>aumento de la oferta de servicios jurídicos</u> para la defensa de los derechos de las poblaciones de menores ingresos, (iii) desarrollo de instrumentos para el diseño de políticas de prevención del delito, y (iv) defensa de derechos de población penitenciaria; y (3) <u>difusión y seguridad jurídica</u>: difusión de las mejores prácticas judiciales en el nivel provincial y la consolidación de la legislación vigente argentina.</p>	<p>Informes Semestrales Informes de consultoría Informes anuales de las entidades participantes Ejecución presupuestaria de entidades participantes Planes Operativos Anuales</p>	<p>Capacidad institut Coordinación inte Compromiso de e proceso de cambi Período elecciona</p>
<p>N JURIDICA o de la PTN</p> <p>a capacidad de defensa del juicio.</p> <p>modernizados de gestión y a cartera de juicios del Estado grado de gestión de los ídricos y sistema de interno de la PTN).</p> <p>la PTN y del Cuerpo de apacitado en los sistemas</p>	<p>Sistema de registro y control de juicios para los 108 servicios jurídicos y 30 delegaciones en el interior, instalado y operativo vía Internet al final del segundo año (45% en el primer año y 55% en el segundo)</p> <p>100% de juicios incorporados al registro de control de juicios al final del segundo año, incluyendo juicios registrados en otras bases de datos y aproximadamente 10.000 juicios transferidos desde el interior del país por los Procuradores Fiscales Federales</p> <p>Procesos internos a la PTN (dictamen, sumarios, seguimiento de expedientes, auditoría y registro, administración y biblioteca) rediseñados y operativos a fines de segundo año con estándares de calidad ISO 9000, incluyendo la sistematización de al menos 400 dictámenes de relevancia (programa piloto primer año) y de 300 inv. administrativas anuales</p> <p>Indicadores de eficacia y eficiencia de procesos individuales (baseline específicos consistentes con ISO 9000) definidos en el primer semestre y programación primer año incluyendo proyecciones de reducción de tiempos para dictámenes y sumarios para los cuatro años;</p> <p>Red de interconexión para los 215 funcionarios de la PTN desarrollada e instalada, operando en Windows y con independencia en la base de datos a fines del tercer año (operación sin papeles).</p> <p>Capacitación en la sistematización de procesos sustantivos y administrativos para los 215 funcionarios de la PTN (30% en el primer año y 70% en el segundo); Capacitación en sistematización en el manejo de informática jurídica para el 50% del Cuerpo de Abogados del Estado (200 en el primer año y 650 para el segundo y tercer año)</p>	<p>Informes semestrales de seguimiento. Informes anuales de gestión de la PTN Reportes estadísticos del sistema de gestión del sistema de servicios jurídicos Planes Operativos Anuales</p>	<p>Continúa el apoyo servicios jurídicos</p> <p>Continúa el apoyo de la Dirección de implantar la rein procesos.</p>

MATRIZ DE MARCO LOGICO DEL PROGRAMA: APOYO AL PROGRAMA DE REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA (AR-0124)

EN DE OBJETIVOS	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
<p>o Institucional del MPF</p> <p>capacidad de la Fiscalía en su órganos jurisdiccionales</p> <p>mentos normativos aprobados amiento</p> <p>ministrativo- financiera y de talecida</p> <p>información desarrollados y amiento</p> <p>personal del MPF capacitados</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Aumento de 30% anual en número de acciones ejercidas por el Ministerio Público Fiscal ante los tribunales. Tomando como base 12.295 acciones en el año 1. - Reglamentos internos elaborados y en vigencia en un plazo de dos años: régimen de carrera, disciplinario y de enjuiciamiento de los fiscales; régimen de reemplazo y de licencia; y reglamento de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas. - 100% de nuevos cargos de fiscales cubiertos por concurso tercer año. - Reingeniería de procesos incluyendo sistemas de información y comunicaciones para el manejo presupuestario integrado, de personal, de seguimiento de expedientes, de información jurídica (dictámenes) y de gestión ejecutiva. - Definición de "tiempos de base (baseline)" para cada uno de los procesos arriba señalados en el primer año; cumplimiento de baseline años 2,3 y 4. - Propuesta de nueva estructura organizativa al final del primer año, implantada el tercer año; incluyendo la reducción en un 30% del personal administrativo central tercer año. - Manuales de personal y administrativos elaborados al finalizar el primer año e implantados al final del tercer año: carrera administrativa, administración financiera, presupuesto, contabilidad, compras, contrataciones, liquidaciones - Inventario y relevamiento de requerimientos edilicios iniciado primer año, terminado segundo año - Sistema integrado de administración del presupuesto iniciado segundo año, terminado cuarto año; Dirección General de Administración y Finanzas (DGAF) en operación plena tercer año. - Sistema integrado de administración de personal (con la DGAF) gerenciado por la Dirección General de Recursos Humanos con los ajustes propuestos propuesto segundo año, implantado cuarto año - Propuesta de organización Escuela de Fiscalía presentada primer año, Escuela en pleno funcionamiento tercer año - 4 Cursos anuales en temas especializados (derecho procesal penal, nuevas formas de delincuencia etc) iniciados primer año 	<p>Informes de estadísticas por jurisdicción</p> <p>Reglamentos aprobados</p> <p>Informes de consultoría</p> <p>Planes anuales operativos</p>	<p>Se sanciona la for nuevo carácter del mediante Ley</p> <p>Compromiso de a reglamentos intern</p> <p>Compromiso de a recomendaciones procesos, estructu organizativas y ma</p>

MATRIZ DE MARCO LOGICO DEL PROGRAMA: APOYO AL PROGRAMA DE REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA (AR-0124)

EN DE OBJETIVOS	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUE
<p>ECUCION DE POLITICAS ASDEL DELITO Y DE A JUSTICIA</p> <p>la mediación como método resolución de conflictos</p> <p>de la experiencia de mediación obligatoria realizada</p> <p>de los resultados de la comunitaria realizada</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Se dispone al final del segundo año de los resultados de la aplicación de la mediación prejudicial obligatoria (debilidades y fortalezas), con las recomendaciones necesarias para proponer ajustes al régimen - Se presenta, al Congreso, al final del segundo año, una propuesta de modificaciones a la Ley 24.573 - Se modifican las resoluciones Ministeriales necesarias al final el segundo año - Se formula y ejecutan seis cursos de capacitación de mediadores-capacitadores (40 horas c/u) para un cubrimiento total de 240 alumnos al final del año 2. - Se dispone a final del segundo año de los resultados de la evaluación de la mediación comunitaria en Buenos Aires - Realización de dos cursos (40 horas) en el primer año para capacitación de mediadores-capacitadores comunitarios para un cubrimiento de 80 mediadores comunitarios 	<p>Informes de consultoría</p> <p>Planes Operativos Anuales</p> <p>Informes de seguimiento semestrales, incluyendo listas de participantes en la capacitación</p> <p>Propuestas de modificaciones legales</p>	<p>Disposición para recomendaciones</p>

MATRIZ DE MARCO LOGICO DEL PROGRAMA: APOYO AL PROGRAMA DE REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA (AR-0124)

EN DE OBJETIVOS	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUE
<p>ública</p> <p>de la defensa de los derechos a justicia de sectores de sos.</p> <p>ntitucional y técnica de la fortalecida.</p> <p>información desarrollados y miento</p> <p>oficiales capacitados</p>	<p>Incremento total de la oferta de defensa y asesoría en un 70% (10% primer año, 20% anual años subsiguientes) sobre una base para 1996 de 27.663 casos y 13.412 asesorías</p> <p>Creación de una instancia de coordinación superior (Consejo de Coordinación Institucional) en el primer año; reestructuración del MPD incluyendo la creación de tres nuevos departamentos (apoyo técnico-pericial, estadísticas, superintendencia penitenciaria), la modificación de las estructuras de capacitación y de informática, ampliando su campo de acción a la administración de la red local y se crea el "escritorio de ayuda (help desks)" a nivel nacional</p> <p>Elaboración de los siguientes manuales: presupuesto, tesorería, contaduría, pagos, liquidaciones, selección, ingreso, control de la carrera, sanciones y remociones, mesa de entrada, suministros, contrataciones, patrimonio, y de mantenimiento, en los primeros dos años</p> <p>Desarrollo (año 2) e instalación (año 3) de sistemas de control y gestión gerencial (incluyendo aspectos administrativos, financieros y de personal)</p> <p>Diseño e instalación de un sistema piloto gerencial de información - Executive Information System - en el primer año</p> <p>Se diseña y desarrolla (año 1) e implanta (30% año 1, 70% año 2) un sistema descentralizado de seguimiento de causas que reemplaza los libros manuales de registro de expedientes (módulos de actualización y consulta de datos básicos de la causa, de actualización y consulta de eventos, de control de vencimiento de plazos procesales, de análisis histórico de causas anteriores y de control de gestión)</p> <p>Se dota a 160 defensorías de bibliografía de consulta mínima (constitución argentina, código (comentado) procesal civil y comercial, penal, procesal penal, casación penal, procesal constitucional, manuales, diccionarios jurídicos) en el segundo y tercer año del proyecto</p> <p>Se elabora (año 1) e implanta (año 2: 100%) un digesto que incluye el relevamiento de la normativa, dictámenes y resoluciones internas vigentes de la Defensoría</p> <p>Se realizan 10 talleres de inducción al cambio, dirigidos a 300 defensores en los primeros tres años; un curso anual dirigido a 20 defensores cada uno en temas técnicos; 3 cursos (total) dirigidos a los defensores ante la Corte Suprema; 10 cursos y 4 talleres de actualización para los defensores del interior del país; y 5 cursos destinados a los defensores de la Capital;</p>	<p>Informes de consultoría</p> <p>Informes semestrales</p> <p>Planes Operativos Anuales</p> <p>Informes de seguimiento semestrales, incluyendo listas de participantes en la capacitación</p>	<p>Se sanciona la fo nuevo carácter de mediante Ley</p> <p>Compromiso de a reglamentos inter</p> <p>Compromiso de a recomendaciones procesos, estructu organizativas y m</p>

MATRIZ DE MARCO LOGICO DEL PROGRAMA: APOYO AL PROGRAMA DE REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA (AR-0124)

EN DE OBJETIVOS	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUE
<p><u>de políticas de prevención del</u></p> <p>o de los sistemas de para el diseño y ejecución de evención del delito</p> <p>información para la del delito desarrollado y en on base en las cinco zonas que os niveles más altos de bana en el país (Capital an Buenos Aires, Córdoba, ucumán).</p> <p>e análisis técnico de la DNCP</p>	<p>Se elabora un documento estratégico anual sobre prevención del delito para cada una de las cinco zonas urbanas de mayores índices de delincuencia (Capital Federal, Gran Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Tucumán)</p> <p>Se fortalecen los sistemas de información par el diseño de políticas de prevención del delito.</p> <p>Se realizan: (i) tres encuestas en total de victimización a realizarse, en las cinco zonas, con una muestra de 7.800 caso, que permitirán dimensionar la franja de delitos no denunciados y su calificación; (ii) una encuesta de actitudes en el segundo año, en las cinco zonas, con una muestra de 2.700 personas, que permitirá identificar patrones de actitudes y comportamientos sobre los delitos y la violencia, con énfasis en violencia familiar; (iii) dos relevamientos de causas judiciales una por año, en las cinco zonas, que permitirán contar con una base de información confiable sobre los principales delitos denunciados ante los juzgados (principalmente homicidios dolosos y culposos, robos con arma y consumo y tráfico de estupefacientes); y (iv) el establecimiento de un sistema de alerta temprana, con mapeos de violencia mensuales, que permitirán contar con información oportuna, confiable y sistemática sobre la ocurrencia de hechos que producen la muerte a personas en homicidios dolosos, y accidentes de tránsito.</p> <p>Se capacita en funciones a 30 profesionales de la DNCP en análisis de información estadística y en formulación de políticas de prevención del delito durante 24 meses.</p>	<p>Publicación en medios de la información de las encuestas y los relevamientos judiciales.</p> <p>Los informes anuales de la DNCP incluyen análisis de tendencias y lineas estratégicas de prevención del delito incorporando el análisis de los resultados de las encuestas.</p> <p>Informes semestrales de seguimiento.</p> <p>Planes Operativos Anuales.</p>	<p>Colaboración de l municipales y</p> <p>Colaboración de j levantamiento e i información</p>

MATRIZ DE MARCO LOGICO DEL PROGRAMA: APOYO AL PROGRAMA DE REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA (AR-0124)

EN DE OBJETIVOS	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUE
<p>on del Servicio Penitenciario</p> <p>o de los sistemas de obre población penitenciaria ento de acceso a la justicia de procesada y condenada.</p> <p>gestión penitenciaria y arrollados y en operación.</p>	<p>Se reducen los tiempos de ocho meses a 30 días en la recepción de los testimonios de sentencia y en el computo definitivo de las penas en el período de ejecución del proyecto de acuerdo al siguiente cronograma: año 1: 8 meses; año 2: 6 meses; año 3: 2 meses; y año 4: 30 días.</p> <p>Se diseña (año 1 y primer semestre de año 2) e implanta (2o. semestre año 2 y año 3) un sistema de gestión judicial informatizado que permite brindar información oportuna para los jueces, fiscales y defensores sobre la situación de los 6.126 internos en los 29 establecimientos del sistema penitenciario federal</p> <p>El sistema incluye: (i) información sobre la situación legal de las causas, las principales fechas y eventos del proceso (vencimiento de penas, cambios en la legislación que afecten su aplicación, libertad condicional); (ii) el tipo de delito, los procesos pendientes, la jurisdicción de cada caso, la situación de traslados y la progresión del régimen de reclusión; (iii) el desarrollo de instrumentos de alerta temprana de las circunstancias que determinan los cambios de situación del interno, para asegurar el cumplimiento de los términos legales; y (iv) impulsa una actitud proactiva en la obtención de la información por parte de los juzgados, mejorando las comunicaciones y favoreciendo la interacción con los mismos</p>	<p>Informes semestrales de avance</p> <p>Planes Operativos Anuales</p> <p>Informes de auditoría interna incluyendo encuesta a usuarios del sistema</p>	<p>Dotar del persona en el área de siste</p> <p>Colaboración de l el relevamiento d</p> <p>Dispersión geograp penitenciarias</p>

MATRIZ DE MARCO LOGICO DEL PROGRAMA: APOYO AL PROGRAMA DE REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA (AR-0124)

OBJETIVOS	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
<p>PROVINCIAL Y NORMATIVO <u>de la justicia provincial</u></p> <p>Para el Mejoramiento de la Justicia Provincial constituido y en funcionamiento</p> <p>Funcional y administrativo de las actividades de capacitación.</p> <p>Prácticas y experiencias modelo y desarrolladas.</p> <p>Encuestas sobre el sistema provincial desarrollados y</p>	<p>Se constituye y pone en funcionamiento el Instituto para el Mejoramiento de la Justicia Provincial (IMJP) en el primer año con el personal (3), funciones y los recursos (operativos) que aseguran su funcionamiento.</p> <p>Se capacita personal judicial provincial con la realización de: (i) 5 seminarios de actualización legislativa por año, en cada una de las 5 regiones; (ii) un curso anual para peritos y auxiliares, en 15 áreas; (iii) 2 cursos anuales en temas sociales (protección al medio ambiente, a la mujer y a las minorías étnicas) dirigidos a jueces provinciales; y (iv) el financiamiento del material didáctico y de difusión.</p> <p>Se realizan actividades de difusión de mejores prácticas y de experiencias modelo en las siguientes áreas: (i) códigos de ética (año 1); (ii) promoción del acceso a la justicia: establecimiento de jurisdicciones de menor cuantía, el mejoramiento de los juzgados de paz y alternativas para la organización de los sistemas de defensa pública (año 2 y 3); (iii) administración de la justicia: diseño de modelos de organización y funcionamiento de juzgados; elaboración de sistemas de seguridad para el manejo y control de expedientes, documentos y pruebas (año 2 y año 3); (iv) estadística: modelo común y básico y definición de estándares de rendimiento y productividad judicial (año 2 y 3); (v) congestión y mora judicial: tipificación de la mora judicial y el desarrollo de una experiencia piloto en la materia (año 3 y año 4); (vi) informática: necesidades de informatización de las cortes: modelo común para el seguimiento de causas judiciales (case flow management) a nivel de juzgado (año 2 y año 3) y el desarrollo de una base de datos de peritos judiciales (año 1); y (vii) premios anuales a la excelencia judicial (año 1 - año 4).</p>	<p>Informes semestrales de avance</p> <p>Planes Operativos Anuales</p> <p>Resoluciones Consejo Directivo Junta Federal de Cortes</p>	<p>Colaboración de los Jueces Provinciales en la implementación de las recomendaciones de los estudios y las mejoras</p> <p>Aumento de los recursos año al 100% para costos recurrentes</p>
<p><u>Ordenado.</u></p> <p>Legislativo Ordenado terminado, disponible para consulta.</p> <p>Técnicas Legislativas</p>	<p>Digesto Ordenado Legislativo con toda la Legislación Nacional vigente elaborado y disponible para consulta en el SAJ en el 1er trimestre tercer año. Avance de acuerdo al siguiente cronograma: 30% primer año, 80% segundo año, 100% tercer año para las 25.000 leyes a ser consolidadas</p> <p>2 seminarios de difusión de los trabajos de elaboración realizados (uno al año y medio y otro al final del trabajo)</p> <p>Un manual de técnicas legislativas elaborado en el segundo año.</p>	<p>Informes semestrales de avance</p> <p>Planes Operativos Anuales</p> <p>Sistema de consulta vía Internet</p>	<p>Coordinación de los grupos de trabajo de 2 años.</p>

APOYO AL PROGRAMA DE REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA (AR-0124).

CALENDARIO DE LICITACIONES POR COMPONENTE Y ACTIVIDAD	Monto (US\$X1000)	Tipo de Licitación	Fecha Estimada
PROCURACIÓN DEL TESORO			
Sistema Integral de Gestión Servicios Jurídicos			
1. Servicios de consultoría			
Sistema de registro y control de juicios	163	CNFC	1998
Consultoría de capacitación	261.4	CINC	1998
Interconexión Red servicios jurídicos	79.5	CNFC	1998
2. Equipos y Bienes			
Hardware para registro y control de juicios	12	LPN	1998
Equipamiento aula digital	30	LPN	1998
Equipamiento red interconexión	20	LPN	1998
Equipamiento delegados interior	120	LPN	1998
Sistemas de Información Internos			
1. Servicios de consultoría			
Reingeniería de Procesos	158	CNFC	1998
2. Equipos y Bienes			
Red interna	457	LPI	1998
Adquisición e implementación de aplicaciones internas	229.1	LPN	1998
TOTAL	1.530		
FISCALIA			
Desarrollo Normativo			
1. Servicios de consultoría			
Consultores individuales (6)	120	PEB	1998
Fortalecimiento Administrativo Financiero			
1. Servicios de consultoría			
Reorganización Area de Administración Financiera	140	CNFC	1998
Reorganización Area de Recursos Humanos	150	CNFC	1998
Inventario Requerimientos Edilicios	160	CNFC	1998
Sistemas de Información			
1. Servicios de Consultoría			
Administración, Finanzas y Presupuesto	353.5	CIFC	1999
Recursos Humanos	163.5	CNFC	1999
Revisión de Dictámenes	80	CNFC	1998
Sistemas de Seguimiento de Expedientes	285	CIFC	1998
Información Juridica	226	CIFC	1998

CALENDARIO DE LICITACIONES POR COMPONENTE Y ACTIVIDAD	Monto (US\$X1000)	Tipo de Licitación	Fecha Estimada
Gestión Ejecutiva (tablero de mando)	184	CNFC	1999
2. Equipos y Bienes			
Equipamiento inicial	161	LPN	1998
Equipamiento adicional para fiscalías	450	LPI	1999
Capacitación			
1. Servicios de consultoría			
Consultores individuales (12)	273	PEB	1998 - 2001
2. Equipos y Bienes			
Material y equipo didáctico	35	LPN	1989
TOTAL	2.781		
MEDIACIÓN			
Consultoría de evaluación			
1. Servicios de consultoría			
Evaluación y capacitación de la mediación obligatoria	186	CNFC	1998
Evaluación y capacitación de la mediación comunitaria	98	CNFC	1998
TOTAL	284		
DEFENSORÍA			
Componente de Desarrollo Institucional y Fortalec. Técnico			
1. Servicios de Consultoría			
Estructura administrativa, organización y funciones y procedimientos	328	CIFC	1998
Digesto legislativo, incluyendo publicación	202	CIFC	1998
2. Equipos y Bienes			
Material bibliográfico para Defensorías (160)	160	LPN	1998
Componente de sistemas de Información			
1. Servicios de consultoría			
Consultores individuales (1)	108	PEB	1998
Seguimiento de causas y estadísticas	72	CNFC	1998
Sistemas informáticos administrativos	216	CIFC	1999
Sistemas de recursos humanos	216	CIFC	1999
2. Equipos y Bienes			
Paquete software dirección (Exec. Info System)	40	LPN	1998
Ampliación Red Local DGN	15	LPN	1998
Redes locales	228	LPN	1998
Estaciones de trabajo, incluyendo impresoras	432	LPI	1999

CALENDARIO DE LICITACIONES POR COMPONENTE Y ACTIVIDAD	Monto (US\$X1000)	Tipo de Licitación	Fecha Estimada
Componente de capacitación			
1. Servicios de consultoría			
Consultores individuales (10)	266	PEB	1998-2000
Cursos y talleres	469	CNFC	1998-2001
TOTAL	2.752		
PREVENCIÓN DEL DELITO			
Fortalecimiento capacidad técnica de la DNPC			
1. Servicios de consultoría			
Consultores individuales (27)	900	PEB	1998 - 2000
Encuestas			
1. Servicios de consultoría			
Encuesta de victimización	819	CIFC	1998
Encuestas de actitudes	95	CNFC	1999
Relevamientos Judiciales	556	CIFC	1999
Sistema alerta temprana	43	CNFC	1998
Equipamiento Informático y logística			
2. Equipos y Bienes			
Red local, hardware y software	41	LPN	1998
TOTAL	2.454		
INFORMATIZACIÓN SISTEMA PENITENCIARIO			
Gestión penitenciaria y judicial			
Consultores individuales (5)	246	LPN	1998
Equipos y Bienes			
Equipo Unidades, cableado y Equipos Juzgados	321	LPN	1998
Equipo DNCP	45	LPN	1998
Software oficina	130	LPN	1988
TOTAL	742		
MEJORAMIENTO JUSTICIA PROVINCIAL			
Capacitación			
1. Servicios de consultoría			
Consultores individuales (16)	535	PEB	1998-2001
2. Equipo y Bienes			
Red local Junta	45	LPN	1998
Difusión de mejores practicas y de experiencias modelo			
1. Servicios de Consultoría			
Necesidades estadísticas y diseño paquete común	144	CNFC	1999

CALENDARIO DE LICITACIONES POR COMPONENTE Y ACTIVIDAD	Monto (US\$X1000)	Tipo de Licitación	Fecha Estimada
Estudio congestión y mora judicial	300	CIFC	2000
Estudio informática nivel provincial	170	CNFC	1999
Base de datos y criterios selección peritos	54	CNFC	1998
Productividad judicial y fijación de estándares	36	CNFC	1998
Sistemas de seguridad de expedientes	30	CNFC	1999
Modelos administrativos tipo	385	CIFC	1999
Modelos defensa oficial	72	CNFC	1999
Modelos de tribunales menor cuantía	69	CNFC	1999
Premio a la excelencia judicial	40	PEB	1998-2001
Estudios			
1. Servicios de consultoría			
Factibilidad Escuela Judicial Nacional	150	CNFC	1999
Finanzas de los sistemas judiciales	144	CNFC	1999
Encuestas funcionamiento de la justicia entre usuarios	90	CNFC	1999 y 2000
TOTAL	2.264		
DIGESTO ORDENADO LEGISLATIVO			
Desarrollo del digesto			
1. Servicios de consultoría			
Consultores individuales (27)	1.912	PEB	1998
2. Equipos y Bienes			
Red local con estaciones, impresoras, conexión remota y software	116	LPN	1998
TOTAL	2.028		
PEB = Procedimiento Estandar de Adquisiciones del Banco.			
\$200.000 = Concurso Nacional Firma Consultora (CNFC)			
\$200.000 = Concurso Internacional Firma Consultora (CIFC)			
\$350.000 = Licitación Publica Nacional (LPN)			
\$350.000 = Licitación Publica Internacional (LPI)			

PROYECTO DE RESOLUCION

ARGENTINA. PRESTAMO OC-AR. A LA NACION ARGENTINA
PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA

El Directorio Ejecutivo

RESUELVE:

Autorizar al Presidente del Banco o al representante que él designe, para que en nombre y representación del Banco proceda a formalizar el contrato o contratos que sean necesarios con la Nación Argentina, como Prestatario, para otorgarle un préstamo destinado a cooperar en el financiamiento de un Programa de Apoyo a la Reforma del Sistema de Justicia. Dicho financiamiento será por una suma de hasta 10 millones quinientos mil dólares (US\$10.500.000) de los Estados Unidos de América de la Facilidad Unimonetaria de los recursos del Capital Ordinario del Banco, y se sujetará a los "Plazos y Condiciones Financieras" y a las "Condiciones Contractuales Especiales" del Resumen Ejecutivo de la Propuesta de Préstamo.